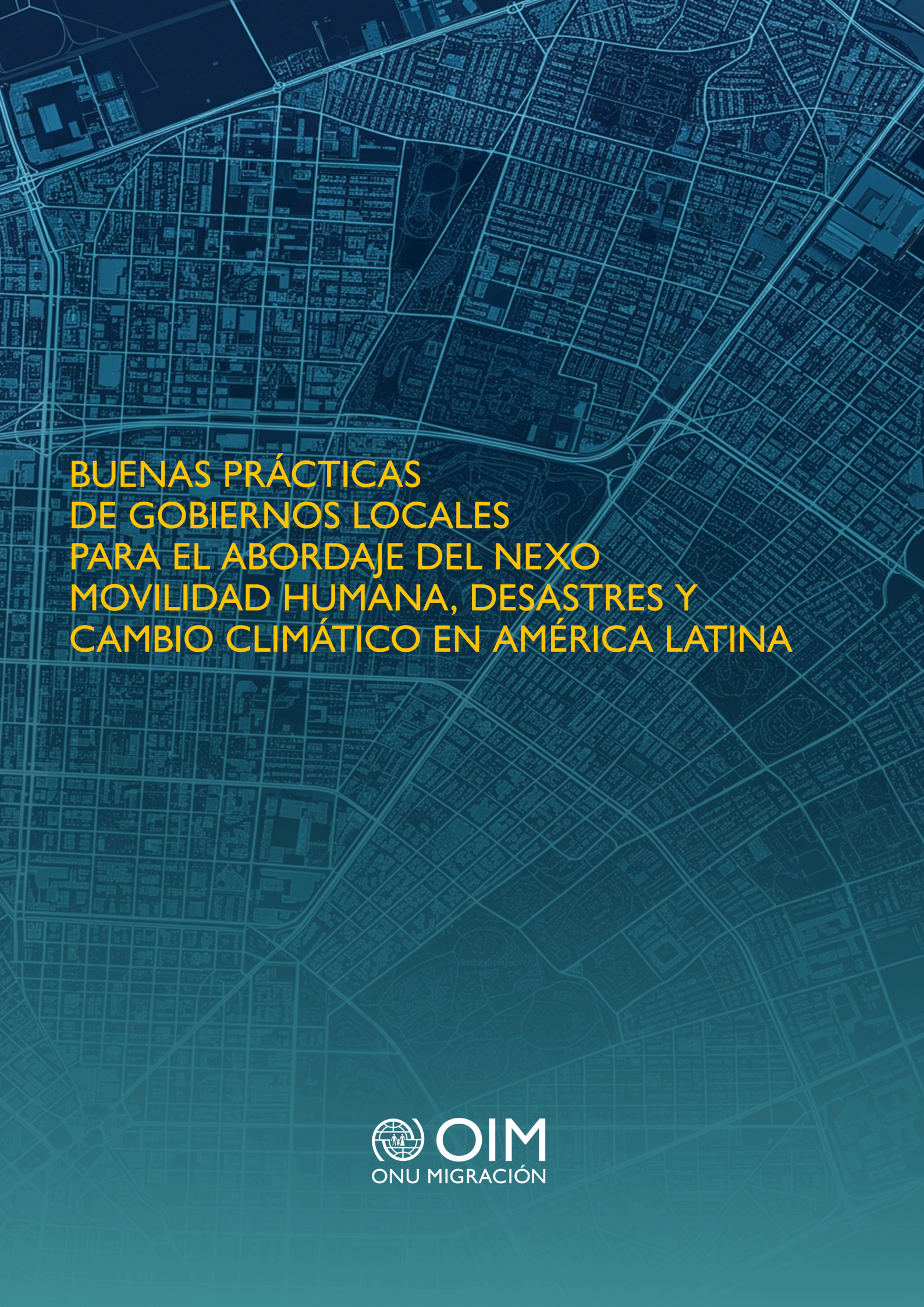


BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNOS LOCALES PARA EL ABORDAJE DEL NEXO MOVILIDAD HUMANA, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA

OIM
ONU MIGRACIÓN

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes..

Publicado por: Organización Internacional para las Migraciones

Oficina Regional de la OIM para Latino América y el Caribe.
Sitio web: www.lac.iom.int

Esta publicación fue financiada en el marco de la cooperación técnica entre la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la OIM

Esta publicación no ha sido editada oficialmente por la OIM.

Esta publicación no ha sido aprobada por la Unidad de Publicaciones de la OIM (PUB) en cuanto a la observancia de las directrices de marca y las normas de estilo de la Organización.

Esta publicación fue emitida sin el aval de la Unidad de Investigación de la OIM (RES)

Imágenes: Creadas mediante inteligencia artificial a partir de imágenes satelitales.

Cita requerida: OIM. Buenas prácticas de gobiernos locales para el abordaje del nexo entre movilidad humana, desastres y cambio climático en América Latina, 2026.

© IOM 2026

Algunos derechos reservados. La presente publicación está disponible en virtud de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).*

Si desea más información, consulte los derechos de autor y las condiciones de utilización.

La presente publicación no podrá ser utilizada, publicada o redistribuida con fines comerciales o para la obtención de beneficios económicos, ni de manera que los propicie, con la excepción de los fines educativos, por ejemplo, para su inclusión en libros de texto.

Autorizaciones: Las solicitudes para la utilización comercial u otros derechos y autorizaciones deberán enviarse a publications@iom.int.

* https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode

BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNOS LOCALES PARA EL ABORDAJE DEL NEXO MOVILIDAD HUMANA, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA

OIM
ONU MIGRACIÓN

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 6

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 7

1.1 PÉRDIDAS Y DAÑOS 7

1.2 MOVILIDAD INDUCIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 7

1.3 EMPLEOS VERDES, MOVILIDAD HUMANA Y TRANSICIÓN JUSTA 8

1.4 GESTIÓN DEL RIESGO CON ENFOQUE DE MOVILIDAD HUMANA 9

1.5 GOBERNANZA LOCAL Y NEXO ENTRE MOVILIDAD HUMANA Y FACTORES AMBIENTALES Y CLIMÁTICOS 9

2. METODOLOGIA Y CASOS DE ESTUDIO 10

3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 12

4. ESTUDIO DE CASO EN AMÉRICA LATINA 13

4.1 EJEMPLOS DE REUBICACION PLANIFICADA 13

Ordenamiento territorial y reubicaciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 14

Reubicación del asentamiento de La Chapita en Paysandú, Uruguay 17

Reasentamiento y protección de moradores en Medellín, Colombia 20

4.2 EJEMPLOS DE GESTIÓN DEL RIESGO E INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN EN MOVILIDAD POBLACIÓN EN MOVILIDAD 26

Gestión de riesgo y atención a población migrante en Upala, Costa Rica 24

Respuesta a amenazas ambientales con perspectiva de movilidad en Camotán, Guatemala 27

Movilidad transfronteriza y gestión del riesgo en Tapachula, México 30

Formación y comunicación sobre riesgos en Heredia, Costa Rica 33

Articulación de la gestión de riesgos y desplazamientos en Cacahoatán, México 36

4.3 EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN EN EMPLEOS VERDES DE POBLACIÓN EN MOVILIDAD 38

Inclusión laboral de la población migrante en Sao Paulo, Brasil 39

Gobernanza migratoria, retornos y emprendimientos agrícolas en San Marcos, Guatemala 43

Abordaje de las brechas en el acceso al empleo en Bogotá, Colombia 46

CONCLUSIONES 49

ANEXO 50

BIBLIOGRAFÍA 51



Las ciudades de América Latina se encuentran en primera línea de la crisis climática. Algunas han desarrollado enfoques innovadores para abordar los vínculos entre los impactos del cambio climático y la movilidad humana. Este mapeo, realizado con la colaboración técnica de la CAF y el apoyo técnico de C40, identifica alguna de estas iniciativas, sus lecciones aprendidas y oportunidades de crecimiento. Las conclusiones que emergen son claras: la movilidad climática requiere la colaboración de todos, y las ciudades deben estar en el centro de la acción.

Diego Beltrand
Director Regional para America Latina a.i., OIM



En América Latina, como en todo el mundo, las ciudades están a la vanguardia tanto de la migración climática como de la implementación de soluciones tangibles, construyendo comunidades económicamente inclusivas y resilientes al clima, a la vez que impulsan transiciones verdes justas y equitativas. Ninguna ciudad tiene una varita mágica, pero es a nivel local donde la innovación y la solidaridad pueden ir de la mano.

En un mundo cada vez más afectado por fenómenos climáticos extremos, este oportuno informe de la OIM destaca cómo el liderazgo de las ciudades, apoyado por iniciativas como el Grupo de Trabajo del Consejo de Alcaldes para la Migración C40, está trabajando para proteger tanto a los residentes como a los recién llegados.

Caterina Sarfatti
Directora General de Inclusión y Liderazgo Global, C40

RESUMEN EJECUTIVO

Los impactos crecientes del cambio climático en América Latina, combinados con desigualdades persistentes, están impulsando dinámicas cada vez más complejas de movilidad humana. Los gobiernos locales ocupan una posición estratégica para responder a estos desafíos, debido a su proximidad al territorio, conocimiento de las realidades locales y competencias en áreas clave como el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo de desastres, el acceso a servicios básicos y la planificación del desarrollo local. No obstante, enfrentan importantes limitaciones para incorporar la movilidad humana en sus políticas e instrumentos de gestión, debido a marcos normativos insuficientes, restricciones financieras y brechas de capacidades técnicas e institucionales, cuya magnitud varía según el contexto de cada territorio.

El presente informe, elaborado por la OIM y la cooperación técnica de CAF, con el apoyo de C40, pone a disposición de gobiernos locales y otros actores relevantes, con trabajo en la escala local, una sistematización de prácticas de gobiernos locales de América Latina en la intersección entre movilidad humana, cambio climático, degradación ambiental y gestión del riesgo para el fortalecimiento de la acción municipal en contextos cada vez más desafiantes.

El estudio se organiza en tres ejes estratégicos:

1. la **reubicación planificada**, cada vez más frecuente en contextos donde no es posible disminuir el riesgo y la exposición de las comunidades;
2. la **gestión del riesgo con enfoque en la integración de la movilidad humana**, en un marco de creciente exposición a eventos climáticos de población migrante;
3. y la **integración económica en empleos verdes de personas migrantes**, en tanto a herramienta para una transición inclusiva y sostenible hacia nuevas formas de producción.

A través de la revisión documental, el análisis de casos y entrevistas con actores clave de municipios de la región, priorizados por su relevancia, la investigación permitió constatar que, aunque la acción local se ve limitada por marcos institucionales y restricciones presupuestarias, existen experiencias innovadoras que evidencian el potencial de los gobiernos locales para liderar y acompañar procesos complejos. Este escenario ofrece un marco de trabajo relevante para alimentar el intercambio de informaciones y el desarrollo de trabajo de capacitación y de estructuración de recursos para reforzar el trabajo de las autoridades locales en esta temática.



1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La región de Latinoamérica enfrenta importantes desafíos que resultan de la convergencia entre el cambio climático y la degradación ambiental, con grandes desigualdades a nivel económico. La evidencia científica reciente confirma que los impactos climáticos interactúan con desigualdades históricas, informalidad urbana, déficits de vivienda y brechas en acceso a servicios, generando patrones de movilidad complejos y diferenciados (CSM y OIM, 2022). Inundaciones, deslizamientos, sequías prolongadas, erosión costera y eventos extremos afectan de manera creciente a las poblaciones de la región y sus medios de vida. En la región, más del 75% de los países muestra una menor capacidad de respuesta al cambio climático que el promedio mundial (Caliari, 2021).

En este contexto, la movilidad humana asociada a desastres, degradación ambiental y cambio climático se ha convertido en un fenómeno cada vez más presente. Las personas se desplazan en respuesta a eventos extremos, eventos de progresión lenta, por la pérdida de medios de vida y la degradación de los ecosistemas, en movimientos que interactúan con factores sociales, económicos y políticos.

Pese a tener un papel importante en la gestión de la movilidad ambiental y climática, las desigualdades presentes en la región hacen que no todos los gobiernos locales cuenten con las herramientas, el financiamiento y los marcos normativos definidos para abordar la movilidad humana desde una perspectiva preventiva, inclusiva y sostenible (CSM y OIM, 2022). A pesar de ello, emergen experiencias en donde los municipios han logrado integrar la movilidad humana en sus estrategias de desarrollo local.

En este contexto, este informe tiene por objetivo mapear prácticas relevantes de gobiernos locales de la región en materia de movilidad humana asociada a desastres, degradación ambiental y cambio climático para identificar experiencias con potencial de réplica que fortalezcan el diseño de políticas públicas en la región.

Para el desarrollo de la investigación, se utilizan como referencia las siguientes definiciones que estructuran el análisis del informe, alineadas con la literatura especializada y con los marcos conceptuales de Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), Platform on Disaster Displacement (PDD), Mixed Migration Centre (MMC), y la red Researching Internal Displacement.

1.1 PÉRDIDAS Y DAÑOS

A pesar de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no ha desarrollado una definición oficial, las pérdidas y daños se refieren a los impactos negativos registrados o esperados del cambio climático, que ocurren cuando los límites de la adaptación se han sobrepasado. Pueden presentarse en contextos de eventos climáticos extremos como los huracanes u olas de calor y los eventos de evolución lenta, como el incremento del nivel del mar. Se entiende por pérdidas a los impactos irreversibles que no se pueden recuperar ni reparar, como la desaparición de una comunidad debido al incremento del nivel del mar y los daños como los impactos que se pueden reparar o restaurar (Martinez, 2021).

En este contexto, la movilidad humana inducida por el cambio climático se puede traducir como una medida de adaptación o como un daño y/perdida que sufren las personas o poblaciones afectadas producto de la crisis climática. Además, puede ser tanto el resultado de las pérdidas y daños como una forma misma de pérdida y daño.

La discusión sobre la relación entre la movilidad humana y la adaptación ha recibido una atención creciente en los últimos años (La Ruta del Clima, 2023). En este contexto, “los planes de adaptación eficaces reconocen que la movilidad humana en el contexto del cambio climático es multidireccional: el cambio climático afecta a la movilidad humana y la situación de la movilidad humana también influye en la vulnerabilidad a los riesgos climáticos” (UNFCCC, 2024).

1.2 MOVILIDAD INDUCIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Acorde a la OIM, el concepto de “movilidad humana” abarca todas las diferentes formas de movimiento de personas (OIM, 2019). Así, la “movilidad humana inducida por el cambio climático" es aquella que se relaciona con los impactos de la emergencia climática, cuyas consecuencias adversas provocan alteraciones en la intensidad, frecuencia y extensión de fenómenos meteorológicos extremos, desastres socioambientales y profundizan la degradación ambiental. Todas estas consecuencias, se entrelazan con otros factores tales como los sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales, generando el movimiento de personas o comunidades, de forma interna o transfronteriza (CIDH, 2024).

Desde una perspectiva de riesgo, la movilidad inducida por el clima se sitúa en la intersección entre exposición a amenazas, vulnerabilidad socioeconómica y capacidad institucional de respuesta. En contextos como América Latina, la movilidad climática se ve amplificada por los escenarios de desigualdad, informalidad urbana y gobernanza fragmentada, lo que genera patrones complejos de desplazamiento, migración y reasentamiento (IDMC, 2024).

a. Desplazamiento por desastres y eventos extremos

Se entiende por desplazamiento por desastre el movimiento de personas que se ven forzadas u obligadas a dejar su lugar de origen o residencia habitual a raíz de un desastre o para evitar ser afectados por los efectos de una amenaza inmediata y previsible. (OIM, 2019)

El desplazamiento por desastres suele ser de carácter reactivo y generalmente no planificado, se puede dar a nivel interno (dentro del país) o, en algunos casos, cruzar fronteras. Este tipo de desplazamiento puede implicar la pérdida de bienes, redes sociales y medios de vida, reflejando procesos de pérdidas y daños en contextos de cambio climático.

b. Migración (influenciada por el clima)

La migración influenciada por el clima describe movimientos en los que las personas deciden migrar —dentro del país o hacia el exterior— en respuesta a la degradación progresiva de las condiciones ambientales y climáticas, aun cuando no exista un evento extremo puntual que las obligue a salir (Mixed Migration Centre, 2022).

A diferencia del desplazamiento, la migración implica un grado mayor de agencia, y los impactos climáticos actúan como "multiplicadores del riesgo" que interactúan con la pobreza, desigualdad, violencia o falta de oportunidades, la migración puede ser entonces una estrategia de adaptación (Mixed Migration Centre, 2022).

c. Reubicación planificada

La reubicación planificada define un proceso organizado por el que una persona o un grupo de personas se trasladan o reciben ayuda para dejar sus hogares o su lugar de residencia temporal, y se instalan en un nuevo emplazamiento donde se les ofrecen las condiciones necesarias para reconstruir sus vidas. La reubicación planificada debe tener por objetivo proteger a las personas de los riesgos y los efectos relacionados con los desastres y la degradación ambiental, incluidas las consecuencias del cambio climático, y solo debe llevarse a cabo a nivel individual, familiar o comunitario como medida de último recurso (OIM, 2019).

La reubicación es una medida de política pública que requiere proceso de atención integral, esto implica la identificación de zonas de riesgo, selección de sitios receptores, entrega de vivienda, servicios básicos (agua, electricidad, educación, salud), infraestructura, transporte, preservación de los medios de vida, respeto a pautas culturales y acompañamiento en procesos de reintegración y atención a la salud mental, entre otros. Este proceso, debe incorporar participación significativa de la población a ser reubicada y, cuando corresponda, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Es por esto, que es necesaria la definición de marcos normativos claros, financiamiento sostenible y gobernanza multinivel, para asegurar el bienestar de las comunidades en cuestión y disminuir procesos de retorno, estigmatización de la población reubicada y facilitar la integración de las comunidades en los nuevos territorios.

d. Inmovilidad

La inmovilidad al igual que la movilidad, es considerada como fenómeno dinámico y multicausal, que puede ser de carácter voluntario o bien de carácter forzado, que se ve influenciado por factores políticos, económicos y sociales como el apego al territorio y vínculos familiares (Martinez & Gutiérrez, 2020).

Por tanto, la inmovilidad, en el contexto del cambio climático, puede ser forzada en contextos donde predominan barreras socioeconómicas para desplazarse, o bien puede ser inmovilidad voluntaria como fruto del arraigo al territorio (Ayuda en Acción, 2025).

La inmovilidad es el reflejo de decisiones, negociaciones y limitaciones, a menudo condicionadas por los roles de género en el cuidado de otras personas, la exclusión legal, la dinámica del hogar, las presiones climáticas, la exposición a conflictos o los repetidos fracasos migratorios (Ayuda en Acción, 2025).

1.3 EMPLEOS VERDES, MOVILIDAD HUMANAY TRANSICIÓN JUSTA

La transición hacia economías bajas en carbono apunta a una transformación profunda de los mercados laborales en América Latina. Este proceso, impulsado por la necesidad de reducir emisiones, adaptarse a los impactos del cambio climático y promover modelos de desarrollo más sostenibles, abre oportunidades significativas para la creación de empleos verdes decentes. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleos verdes son aquellos que contribuyen a reducir emisiones, proteger ecosistemas y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que garantizan condiciones laborales dignas, seguridad social y estabilidad (OIT, s.f.). La transición justa, por su parte, implica que

estos cambios estructurales deben realizarse de manera equitativa, asegurando que los grupos más vulnerables —incluyendo personas migrantes y desplazadas— puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades económicas (OIT, 2015).

La literatura reciente destaca que las personas migrantes ya desempeñan un papel fundamental en sectores clave para la transición ecológica, como la construcción sostenible, la gestión de residuos, la movilidad eléctrica y los servicios urbanos esenciales (C40 Cities & Institute for Sustainable Futures, 2024). Sin embargo, enfrentan barreras significativas para acceder a empleos verdes formales, incluyendo restricciones normativas, falta de reconocimiento de su documentación, discriminación, informalidad y limitaciones en el acceso a formación técnica (Weller, 2025).

1.4 GESTIÓN DEL RIESGO CON ENFOQUE DE MOVILIDAD HUMANA

La gestión del riesgo de desastres tiene vocación a incorporar cuestiones relacionadas con la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y la planificación territorial. En este marco ampliado, la movilidad humana —incluyendo desplazamiento interno, migración, inmovilidad y reubicación planificada— se reconoce como una dimensión para comprender y gestionar los impactos del cambio climático en contextos urbanos (UNDRR, 2015).

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030 establece explícitamente que los Estados deben formular políticas públicas que aborden la prevención o el traslado de asentamientos humanos ubicados en zonas expuestas a riesgos, respetando los derechos humanos y los marcos jurídicos nacionales (UNDRR, 2015). Este reconocimiento marca un punto de inflexión: la movilidad humana deja de ser vista únicamente como una consecuencia de los desastres y pasa a considerarse un componente de la gestión del riesgo y de la adaptación al cambio climático.

1.5 GOBERNANZA LOCAL Y NEXO ENTRE MOVILIDAD HUMANA Y FACTORES AMBIENTALES Y CLIMÁTICOS

Las ciudades del Sur Global se han consolidado como espacios críticos donde convergen los efectos del cambio climático y la movilidad humana. Según el Groundswell report del Banco Mundial, en los peores escenarios, hasta 17,1 millones de personas podrían migrar dentro de los países de América Latina para 2050 desde zonas cada vez menos habitables, con menor disponibilidad de agua y menor productividad agrícola, así como desde zonas afectadas por el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas (World Bank, 2018). En este contexto, las ciudades reciben flujos crecientes de migrantes y personas desplazadas por desastres, lo que con frecuencia aumenta la presión sobre la infraestructura urbana, los servicios básicos y los sistemas de protección social, profundizando desigualdades preexistentes. Al mismo tiempo, muchas ciudades albergan asentamientos informales ubicados en zonas de alto riesgo que, en algunos casos, deben transitar procesos de reubicación planificada cuando la permanencia en el territorio se vuelve inviable.

Acorde a datos de C40, se proyecta que ciudades como Bogotá y Sao Paulo podrían triplicar la recepción de migrantes climáticos, debido a la reducción del rendimiento agrícola, el incremento del nivel del mar y eventos extremos (C40, 2024). A su vez, se proyecta que para el 2050, 10.5 millones de migrantes climáticos podrían llegar a los centros urbanos de México y Centroamérica (MMC, 2022).

La movilidad inducida por impactos climáticos genera desafíos adicionales para municipios que ya enfrentan limitaciones estructurales para integrar a estas poblaciones en mercados laborales formales, especialmente en sectores emergentes vinculados a la transición verde (C40 Cities & Institute for Sustainable Futures, 2024).

En este escenario, la gobernanza local se vuelve un ámbito estratégico para gestionar el nexo entre movilidad humana, degradación ambiental y cambio climático.

Los gobiernos locales constituyen el primer nivel de respuesta frente a emergencias y son quienes enfrentan de manera directa los desafíos asociados a los asentamientos informales, la presión sobre los servicios públicos y las necesidades de integración de las poblaciones migrantes y desplazadas. A su vez, sus competencias en materia de gestión del riesgo, ordenamiento territorial, inclusión social y desarrollo económico los posicionan como actores clave para incorporar la movilidad humana como una dimensión estructural de las estrategias de adaptación al cambio climático y construcción de resiliencia.

Frente a estos desafíos, los municipios han comenzado a desempeñar un papel internacional cada vez más relevante mediante su participación en redes globales de acción climática, cooperación descentralizada e intercambio de conocimiento. A través de su participación en redes globales de acción climática y cooperación como C40 Cities, ICLEI y coaliciones regionales, los gobiernos locales se convierten en actores con influencia, que movilizan recursos e intercambian soluciones.

2. METODOLOGIA Y CASOS DE ESTUDIO

Para la elaboración del estudio, se adoptó un enfoque exploratorio, cualitativo orientado a identificar, analizar y sistematizar prácticas relevantes de los gobiernos locales de América Latina en la intersección entre movilidad humana y cambio climático. La metodología combina la revisión documental, el análisis de casos y entrevistas a informantes clave, permitiendo capturar la diversidad territorial y contextual, así como los elementos comunes que facilitan o limitan la acción local.

La revisión de literatura se estructuró en torno a la movilidad humana inducida por el cambio climático. Este proceso combinó fuentes académicas y documentos técnicos de organismos internacionales, redes de ciudades y organizaciones especializadas en pérdidas y daños, adaptación y migración. El desk review de literatura académica y técnica sobre movilidad humana inducida por el cambio climático, reubicación planificada, gestión del riesgo y empleos verdes, incluyó artículos académicos, informes de organismos internacionales y ONG, estudios de caso de América Latina, documentos municipales, entre otros. Con esta información se construyó una matriz preliminar de experiencias. Por otro lado, se hizo una revisión de literatura para identificar el vínculo entre movilidad humana inducida por el cambio climático y la transición justa enfocada en el acceso a empleos verdes. Se identificó que la literatura conecta el cambio climático con dos procesos paralelos el aumento de la movilidad humana y una reestructuración profunda de los mercados laborales hacia empleos verdes. Sin embargo, los trabajos relacionan ambos procesos más a nivel de políticas y estructuras que caso por caso.

A partir de esta revisión, se definieron las siguientes categorías de análisis del estudio:

Reubicación Planificada consecuencia del cambio climático

Se hizo un mapeo de casos donde gobiernos locales han liderado o asumido un rol importante en procesos de reubicación de comunidades impactadas por cambio climático, en estos casos se analiza la gobernanza interinstitucional, la participación comunitaria, el acceso a la tierra, la sostenibilidad de los medios de vida y el financiamiento.

Inclusión de población en movilidad en empleos verdes

Se buscaron casos donde los gobiernos locales han implementado programas de formación, certificación, reconversión laboral o inserción en sectores verdes (gestión de residuos, construcción sostenible, energías renovables, restauración ecológica, entre otras) incluyendo a población migrante. En estos casos, se evalúa la accesibilidad para la población migrante, las alianzas público-privadas, los resultados en cuanto a inclusión económica.

Gestión de riesgo con enfoqueen movilidad humana

Iniciativas donde la movilidad – desplazamiento, migración, inmovilidad o reubicación – es incorporada explícitamente en los planes de ordenamiento territorial, sistemas de alerta temprana, estrategias de reducción del riesgo, instrumentos de planificación urbana ya implementados, donde se analizan capacidades institucionales, datos disponibles, mecanismos de coordinación y vacíos de gestión.

La segunda etapa consistió en consultas técnicas con organizaciones y redes que trabajan directamente en movilidad humana, cambio climático y gobernanza. Entre los actores consultados se incluyó C40 Cities, Platform on Disaster Displacement (PDD), OIM, Municipios y gobiernos locales (ver Anexo).

La tercera etapa consistió en una búsqueda estructurada en internet, se revisaron portales de gobiernos locales, bases de datos de proyectos, notas de prensa verificables e informes de ONGs y centros de investigación. A partir de este proceso se definió criterios de selección para los casos a analizar, que tuvieran relevancia temática, un rol activo del gobierno municipal, documentación disponible, accesibilidad a los actores clave, diversidad geográfica y potencial de escalamiento en otros contextos de LAC.

El análisis de casos constituye, por tanto, la fase central de este estudio. A partir de las categorías definidas — reubicación planificada, inclusión en empleos verdes, gestión del riesgo con enfoque en movilidad humana y buenas prácticas municipales— se seleccionaron experiencias que permiten ilustrar distintos modelos de gobernanza, niveles de capacidad institucional y enfoques de intervención. Cada caso fue analizado utilizando una estructura común que deriva directamente del marco metodológico:

- Contexto territorial y climático, para situar la experiencia en su entorno físico y socioeconómico.
- Tipo de movilidad humana involucrada (desplazamiento, migración, reubicación, inmovilidad).
- Rol del gobierno local, con énfasis en competencias,

liderazgo y coordinación multinivel.Instrumentos utilizados, incluyendo políticas, planes, protocolos, mecanismos de participación y herramientas técnicas.

- Resultados y desafíos, tanto en términos de protección, inclusión, sostenibilidad y gobernanza.
- Elementos replicables y potencial de escalamiento, alineados con los criterios de buena práctica definidos en la metodología.

PRÁCTICAS SELECCIONADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO



Este mapa es únicamente para fines ilustrativos. Los límites y los nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa, no implican la aprobación ni la aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El proceso de identificación y selección de casos de estudio enfrentó diversas limitaciones estructurales que reflejan tanto la disponibilidad desigual de información como las características propias de la gobernanza local en América Latina. Estas limitaciones no solo condicionaron el alcance del mapeo, sino que también evidencian vacíos más amplios en la documentación, sistematización y evaluación de prácticas locales vinculadas a movilidad humana y cambio climático.

Una de las principales limitaciones fue la falta de información sistematizada y accesible sobre experiencias locales. Aunque existe una creciente producción académica y técnica sobre movilidad climática, la mayoría de los estudios se concentran en marcos nacionales o regionales, dejando un vacío significativo en la documentación de iniciativas municipales.

La revisión de literatura y las consultas con actores especializados confirmaron que existen muy pocas experiencias de movilidad humana y cambio climático lideradas de manera autónoma por gobiernos locales. En la región, la gestión de la movilidad inducida por el clima sigue siendo altamente centralizada, con predominio de ministerios de vivienda y ambiente.

Esto se vincula mucho a la falta de competencias legales, financiamiento propio y capacidades técnicas, que limita su capacidad para impulsar iniciativas propias. Como resultado, las experiencias locales documentadas tienden a ser excepcionales y no representativas de la realidad general de los gobiernos municipales de la región.

La reubicación planificada —una de las categorías centrales del estudio— es un campo donde la acción local es especialmente limitada. En la mayor parte de los casos a nivel regional, la reubicación de comunidades expuestas a riesgos climáticos es gestionada por instituciones nacionales, debido a su complejidad jurídica, financiera y social. En estos procesos los municipios participan en la identificación de zonas de riesgo, la provisión de servicios o la articulación comunitaria, pero no lideran el proceso. Esto reduce el número de casos donde los gobiernos locales pueden ser considerados actores principales, lo que restringe la disponibilidad de experiencias comparables. Casos como ACUMAR, Paysandú o Medellín son excepciones que destacan precisamente por su gobernanza multinivel y por la capacidad local para asumir roles estratégicos.

Por otro lado, la intersección entre empleos verdes, transición justa y migración es un campo emergente, con muy pocas experiencias lideradas desde el nivel municipal. Aunque existen programas de empleo verde en ciudades de la región, la mayoría no incorpora explícitamente a población migrante o desplazada como grupo prioritario. Del mismo modo, las iniciativas de inclusión laboral de migrantes suelen estar vinculadas a políticas nacionales de empleo, regularización o protección social, no a estrategias locales de transición justa. Esto redujo significativamente el universo de casos potenciales y obligó a priorizar experiencias donde existiera evidencia mínima de articulación entre ambos campos.

Finalmente, en algunos casos identificados no fue posible contactar a los equipos técnicos municipales debido a que los procesos estaban descontinuados o sin responsables activos. Esto afectó la posibilidad de incluir ciertos casos que, no contaban con condiciones mínimas para un análisis profundo.

Estas brechas, lejos de debilitar el estudio, refuerzan la pertinencia del mapeo y subrayan la necesidad de fortalecer capacidades locales, generar evidencia y promover marcos normativos que habiliten la acción municipal.





4. ESTUDIO DE CASO EN AMERICA LATINA

4.1 EJEMPLOS DE REUBICACION PLANIFICADA



ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REUBICACIONES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO, ARGENTINA

La experiencia de ACUMAR constituye un proceso de gestión ante el daño ambiental y de reubicación planificada, que deriva de la Causa Mendoza, en la que la Corte Suprema ordenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementar un plan integral de saneamiento en la Cuenca Matanza–Riachuelo. Esta intervención combina objetivos ambientales, sociales y territoriales en un contexto de alta vulnerabilidad. En este marco, ACUMAR asumió desde 2006 el rol de organismo interjurisdiccional responsable de coordinar políticas, articular actores y supervisar la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), incluyendo la reubicación de miles de familias que habitaban zonas contaminadas o expuestas a riesgos socioambientales. El caso ofrece un ejemplo de gobernanza multinivel, participación comunitaria y planificación territorial aplicada a un proceso de largo plazo, con aprendizajes relevantes para otros gobiernos locales de la región. Se trata de una causa y procesos de movilidad iniciados por cuestiones de degradación ambiental, aunque las lecciones aprendidas resultan pertinentes también para reubicaciones en contextos de desastres y efectos adversos del cambio climático.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Reubicación planificada en la Cuenca Matanza–Riachuelo.

País:
Argentina

Municipios:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires + 14 municipios del conurbano bonaerense.

Movilidad:
Reubicación Planificada por riesgo ambiental y sanitario, dentro de un proceso integral de saneamiento ambiental

Periodo:
2008 - Actualidad

Instituciones responsables:
ACUMAR, Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires, CABA, municipios.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

La Cuenca Matanza – Riachuelo, se caracteriza por ser un territorio altamente degradado y contaminado por décadas de actividad industrial y falta de saneamiento, presencia de asentamientos informales en zonas inundables y altos niveles de pobreza. La sentencia de la Corte Suprema en la Causa Mendoza (2008) obliga a mejorar calidad de vida, recomponer ambiente y prevenir daños futuros.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

La reubicación planificada forma parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), coordinado por ACUMAR. El proceso implicó el desarrollo de una serie de protocolos participativos, para asegurar la inclusión de las personas afectadas

La Corte fija una meta de 17.771 soluciones habitacionales de las cuales se han ejecutado 7.638 (ACUMAR, 2026).

Aunque los municipios no fueron condenados por la sentencia, son el brazo operativo del proceso. Sus funciones incluyen:

- La identificación de barrios y familias en riesgo socioambiental,
- Aplicación del Protocolo de Reubicación de ACUMAR, adaptándolo a la realidad local.
- Acompañamiento social, antes, durante y después de la mudanza.
- La gestión de los servicios locales (educación, salud, transporte, seguridad).
- Ejecución de obras
- Gestión de conflictos y comunicación comunitaria
- Articulación interinstitucional en Mesas de Gestión.

Para esto usan una serie de herramientas clave:

- Protocolo de Reubicación (ACUMAR, 2017): define criterios, etapas, estándares de derechos humanos y participación
- Mapas de riesgo socioambiental para priorizar barrios.
- Censos y fichas de relocalización para trazabilidad familiar.
- Mesas de Gestión para coordinar decisiones entre Nación, Provincia, CABA, municipios y ACUMAR.

4. IMPACTO O RESULTADOS

7.638 soluciones habitacionales ejecutadas (vivienda nueva, mejoramientos y urbanización).

Liberación progresiva del camino de sirga.

Reducción de exposición a riesgos ambientales y sanitarios.

Mejoras significativas en habitabilidad y acceso a servicios.

Fortalecimiento de la gobernanza interjurisdiccional.

Desarrollo del Protocolo de Reubicación, hoy considerado un estándar regional.

Mayor institucionalización de procesos de acompañamiento social.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

Las Mesas de Trabajo son el dispositivo central de participación comunitaria en los procesos de reubicación. Es un espacio institucionalizado de diálogo, negociación y toma de decisiones entre la comunidad, equipos municipales y ACUMAR. Influyen directamente en los criterios de adjudicación, diseño de soluciones y resolución de conflictos.

Son espacios institucionalizados flexibles que se adaptan a cada barrio y al nivel de conflictividad o vulnerabilidad social, en donde se ajustan decisiones acordes a prácticas culturales, medios de vida o dinámicas barriales. Tienen como propósito garantizar la participación significativa de las familias, asegurar la transparencia en los criterios de adjudicación de viviendas, prevenir conflictos, adaptar el proceso a cada territorio, y construir legitimidad social para las reubicaciones. Son espacios para el monitoreo de avances, resolver emergentes e identificar impactos no previstos (pérdidas y daños sociales, económicos o culturales).

En las mesas, se cuenta con delegados barriales elegidos por las comunidades, equipos sociales del municipio, equipos sociales y técnicos de ACUMAR, organizaciones comunitarias y organismos de derechos humanos.

Las mesas de trabajo pueden tener diferentes niveles, pueden ser informativas en contextos de baja organización comunitaria, consultivas para obtener opiniones y preocupaciones de las comunidades, o deliberativas en donde las comunidades participan en decisiones clave.

Aunque son mecanismos robustos, dependen mucho de las capacidades municipales para sostenerlas, de las tensiones internas de los barrios, de las expectativas comunales, requieren de un equipo social especializado y presencia sostenida.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

1. La creación de un organismo articulador intermedio – que puede ser asumida por una unidad técnica regional, una mancomunidad de municipios, una agencia de gestión del riesgo, un programa local de vivienda o adaptación – que cumpla con las siguientes funciones: coordinación entre niveles de gobierno, ordenamiento de responsabilidades, generación de estándares comunes, producción de herramientas técnicas, permanencia más allá de rotaciones políticas.

2. Un Protocolo de Reubicación como estándar técnico y social – que puede concebirse como una guía técnica, normativa local, manual operativo, instrumento de planificación urbana, desde la realidad de los municipios – que determine los mínimos de una reubicación, ordene las etapas del proceso, defina principios de derechos humanos, participación y sostenibilidad, facilite la comparabilidad de los procesos y su auditoría

3. Mesas de Trabajo como mecanismo de participación comunitaria: estos espacios pueden ser adoptados por cualquier municipio ya que facilitan la legitimidad del proceso, previenen conflictos, permiten la co-construcción de soluciones, mejoran la transparencia, integran saberes comunitarios.

4. Mapas de riesgo socioambiental como herramienta de priorización: Estos mapas debe integrar amenazas, vulnerabilidades y exposición, permite la priorización de las comunidades, orienta las decisiones de inversión, evitar arbitrariedades, facilita la justificación de las intervenciones.

5. Implementación de fichas de relocalización y trazabilidad familiar para documentar cada caso, registrar vulnerabilidades, justificar entregas de viviendas, hacer seguimiento post-reubicación.

6. Mesas de Gestión interinstitucional, son un mecanismo que facilita la coordinación de servicios, la resolución de problemas operativos, la coordinación de tiempos de las obras, la articulación de programas nacionales y locales.

7. La Cicatrización del territorio de origen, es un elemento clave para evitar el repoblamiento y consiste en la demolición de las estructuras y la recuperación ambiental del territorio.

8. La evaluación de gastos de origen y destino de las poblaciones, permite un enfoque socioeconómico que evita que las familias entren en una condición de mayor vulnerabilidad debida a endeudamiento, permite prevenir retornos, garantizar la sostenibilidad económica.

9. Velar por un enfoque origen – reubicación – destino, donde se analice los impactos en ambos territorios, se planifique la transición, se coordine con ambas localidades y se asegure la continuidad de las redes sociales y tejido comunitario

7. LECCIONES APRENDIDAS

La reubicación planificada requiere gobernanza multinivel estable y mecanismos claros de coordinación.

Los municipios son actores clave: su capacidad técnica y social determina la calidad del proceso.

La participación comunitaria debe ser temprana, sostenida y adaptada a cada territorio.

La reubicación no puede centrarse solo en la vivienda: debe integrar servicios, movilidad, medios de vida y tejido social.

La falta de financiamiento para equipamiento, reconversión laboral y cicatrización genera vulnerabilidades persistentes.

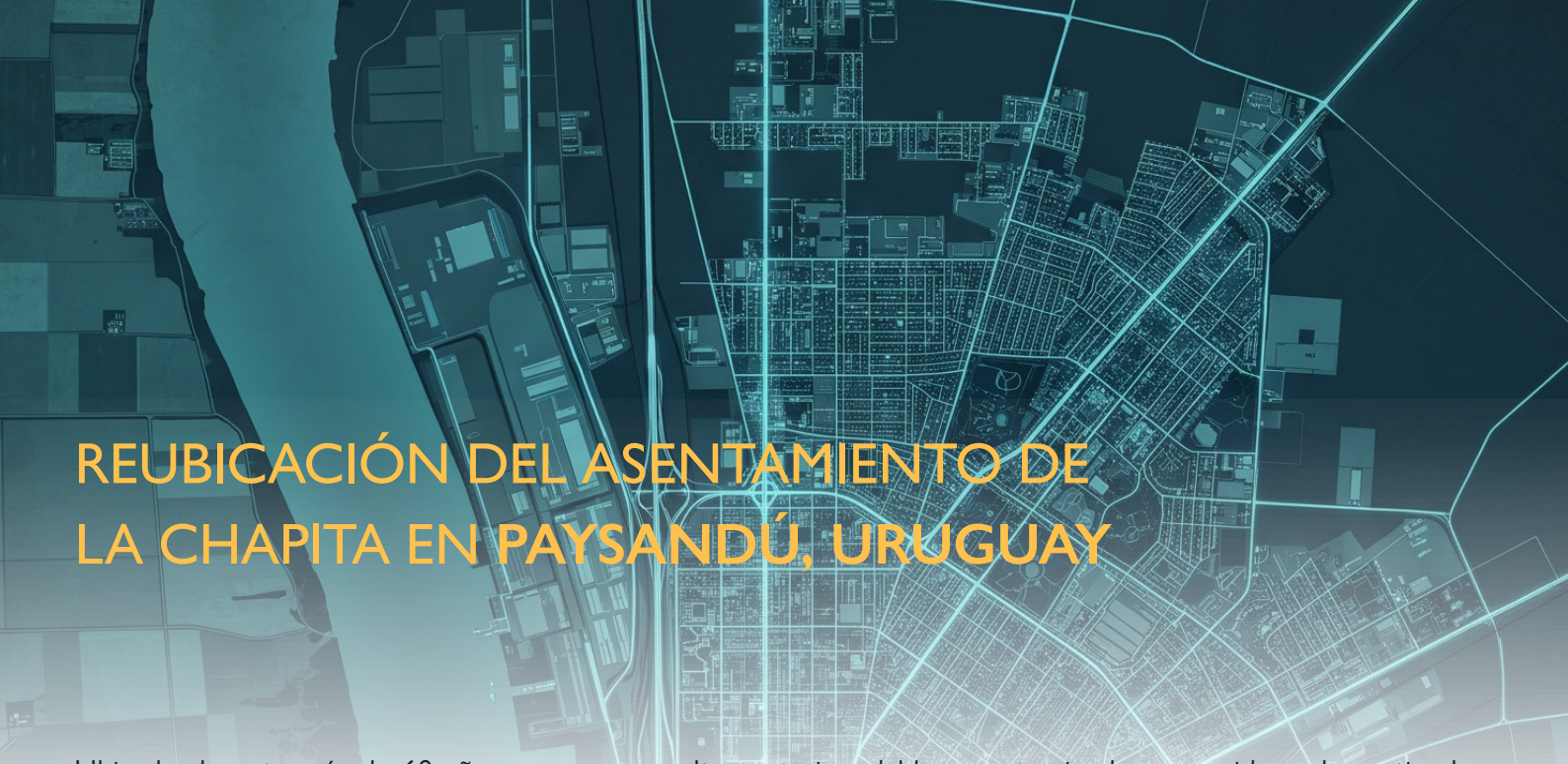
Los protocolos técnicos aumentan transparencia, comparabilidad y legitimidad.

La sostenibilidad del proceso depende de la trazabilidad familiar y del seguimiento post-reubicación.

Se debe trabajar en procesos de integración urbana.

El acompañamiento para la reconversión laboral o recuperación de medios de vida es fundamental.

Se debe velar porque se cuente con todos los servicios en los nuevos barrios y exista facilitades de movimiento y conectividad entre barrios.



REUBICACIÓN DEL ASENTAMIENTO DE LA CHAPITA EN PAYSANDÚ, URUGUAY

Ubicado durante más de 60 años en una zona altamente inundable y contaminada por residuos de curtiembre con cromo, el asentamiento de la Chapita concentraba condiciones extremas de vulnerabilidad que se volvieron insostenibles tras la inundación histórica de 2015–2016. Este evento, sumado a la actualización del mapa de riesgo y a la declaración de emergencia por parte de Presidencia, catalizó un proceso interinstitucional que articuló al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la Intendencia de Paysandú, DINAGUA (Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente), MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) y organismos de cooperación internacional. El resultado fue una reubicación planificada de 128 familias, acompañada de remediación ambiental, reconversión laboral y la transformación del territorio de origen en un parque inundable resiliente, integrando criterios de adaptación al cambio climático, cohesión social y sostenibilidad urbana.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Reubicación del asentamiento informal La Chapita.

País:
Uruguay

Municipios:
Paysandú.

Movilidad:
Reubicación preventiva y post desastre, motivada por inundaciones extremas del Río Uruguay y contaminación por cromo.

Periodo:
2015 - Actualidad

Instituciones responsables:
Intendencia de Paysandú, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente/DINAGUA, SINAE, Presidencia, instituciones descentralizadas.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

La Chapita era un asentamiento informal con más de 60 años, ubicado a la ribera del Río Uruguay, en una zona altamente inundable y contaminada por residuos de producción de cuero, específicamente cromo, con niveles que superaban los estándares aceptables para habitabilidad.

La comunidad además estaba altamente expuesta a eventos extremos. En el 2015, se presenta una inundación histórica, vinculada al fenómeno del Niño, que lleva a la declaración de emergencia y desencadena la reubicación de 128 familias, bajo una nueva cota de seguridad de 6,50 m, definida mediante mapas de riesgo actualizados y el Plan Local de Ordenamiento Territorial.

La población de la Chapita se caracterizaba por su alta vulnerabilidad social, precariedad habitacional y medios de vida informales. El territorio de origen requería además remediación ambiental y recuperación del borde costero.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

La reubicación de La Chapita surge como respuesta a la emergencia, pero se consolida como un proceso integral de ordenamiento territorial, adaptación climática y remediación ambiental.

La intendencia fue el actor territorial clave, responsable de la identificación de las franjas a relocalizar según riesgo y ordenamiento territorial, encargada de adquirir terrenos para la construcción de viviendas por parte del MVOT.

Además, se encargaba de coordinar la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS) con reuniones semanales, acompañar socialmente a las familias, caso por caso, gestionar servicios locales (educación, salud, transporte, cuidados). Este proceso de revisión exhaustiva de cada caso llevó a la construcción de viviendas nuevas en barrios y chacras según tipologías y medios de vida.

Un factor clave fue que desde la intendencia se crea una Policía de Control Territorial con enfoque social, encargada de evitar reocupaciones, acompañar a las familias, garantizar la demolición de viviendas antiguas y mediar conflictos.

La intendencia también supervisa la transformación del territorio de origen en un parque inundable resiliente (Parque Las Chapitas / Ecoparque Mburucuyá), que también implica la remediación ambiental por medio del decapado de suelos y encapsulamiento de zonas críticas.

En cuanto a los aspectos sociales, se trabajó de forma persistente en la reconversión laboral para familias afectadas (Plan ACC Río Uruguay, 2021–2025).

4. IMPACTO O RESULTADOS

128 familias reubicadas fuera de la zona de riesgo.

900 personas con mejoras sustanciales en condiciones de vida.

Remediación ambiental del territorio contaminado.

Construcción de viviendas nuevas financiadas por MVOT.

Creación de un parque resiliente con drenajes, equipamiento y espacios deportivos.

Reducción drástica de exposición a inundaciones y contaminación por cromo.

Preservación parcial de redes comunitarias mediante reubicación diferenciada.

Fortalecimiento de capacidades municipales en gestión del riesgo y ordenamiento territorial.

Integración de vivienda, ambiente y adaptación climática en una misma intervención.

Transformación del asentamiento en un ecoparque como infraestructura de adaptación.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

Se desarrolló un proceso de acompañamiento personalizado y comunitario, donde cada caso se analizó de forma individual: según las entrevistas realizadas, “se fue trabajando muy caso acaso con las familias y en acuerdo y en consenso con ellas para poder realizar la relocalización, esta no fue en masa… incluso en el post-obra se intentó también mantener algunas cuestiones que las familias entendían como importantes”. (García, 2026)

Se hizo la labor de preservar redes de cuidado, alimentación y apoyo mutuo, a través de Asambleas Comunitarias, en donde se presentaban los casos y discutían. Además, estas asambleas hacían visitas grupales a los espacios de construcción de las nuevas viviendas, donde se les explicaba sobre los usos básicos de las mismas.

Se llevaron a cabo talleres y reuniones barriales para discutir la relocalización, la nueva localización y el uso del parque.

Se hicieron ajustes específicos para asegurar, la continuidad escolar, regularización de curatelas y acceso al Sistema Nacional de Cuidados.

Se veló por mantener un enfoque de derechos emergente: acceso a vivienda segura, servicios, cuidados, educación, medios de vida y espacios públicos de calidad, con fuerte reconocimiento de la dignidad de las familias relocalizadas.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

Uso de mapas de riesgo para definir franjas de reubicación;

Articulación de iniciativas vinculadas a vivienda, ordenamiento territorial y remediación ambiental, generando soluciones de infraestructura resilientes y accesibles para todas las poblaciones de la ciudad.

Transformación del territorio de origen en infraestructura resiliente (parques inundables);

Preservación de redes comunitarias como criterio de diseño social, este elemento es característico del proceso, ya que no se reubica las 128 familias en un bloque, sino que se analiza cada caso para identificar una solución acorde a sus necesidades y a las redes comunales de apoyo ya existentes, esto si requiere un equipo técnico que analice cada caso y comunicación cercana con los miembros de la comunidad.

Reconversión laboral post reubicación, se hace un trabajo fuerte en desarrollo de capacidades laborales y acompañamiento para asegurar el acceso a medios de vida de las familias.

Gobernanza multinivel basada en mesas interinstitucionales y continuidad técnica, coordinación con la comunidad a través de Asambleas.

Policía de control territorial con enfoque social para evitar reocupaciones.

Tipologías de vivienda adaptadas a medios de vida (chacras para actividades rurales).

Integración de financiamiento climático (Fondo de Adaptación, CAF, PNUD).

7. LECCIONES APRENDIDAS

La reubicación planificada requiere gobernanza multinivel estable y mecanismos claros de coordinación.

Los procesos deben adaptarse a la realidad social de cada familia, evitando soluciones masivas.

La preservación de redes comunitarias es clave para la sostenibilidad social.

La reconversión laboral es un proceso largo y debe planificarse desde el inicio.

La remediación ambiental y la cicatrización del territorio son esenciales para evitar reocupaciones.

La declaratoria de emergencia acelera decisiones, pero la sostenibilidad depende de financiamiento estable.

La integración de vivienda, ambiente y adaptación climática genera soluciones más robustas.

REASENTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE MORADORES EN MEDELLÍN, COLOMBIA

La experiencia de Medellín en materia de reasentamiento y protección de moradores se ha consolidado con el fin de gestionar los impactos sociales, económicos y territoriales derivados de proyectos urbanos y de reducción del riesgo. Desde la adopción de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) en 2018 y su reglamentación mediante el Decreto 0818 de 2021 y sus posteriores modificaciones, la ciudad ha construido un modelo integral que reconoce a los moradores como sujetos de derechos, incorpora la sostenibilidad de los medios de vida como eje central y establece un proceso técnico estandarizado para el reasentamiento. En un contexto urbano marcado por la expansión informal en laderas, la exposición a movimientos en masa y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, Medellín ha institucionalizado un sistema de gobernanza intersectorial que articula a Planeación, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Instituto Social de Vivienda y Habitad de Medellín (ISVIMED), Inclusión Social y otras entidades del conglomerado público, garantizando que cada intervención urbana incorpore mecanismos de participación, compensación y acompañamiento social. Este enfoque convierte a Medellín en un referente regional en la transición desde prácticas fragmentadas hacia un modelo de reasentamiento con enfoque de derechos, sostenibilidad territorial y protección de actividades económicas.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Procesos de reasentamiento y protección de moradores en Medellín, en el marco de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP).

Tipo:
Reasentamientos asociados a proyectos urbanos, gestión del riesgo, infraestructura y mejoramiento integral de barrios.

Periodo:
2018–presente

Instituciones responsables:
Departamento Administrativo de Planeación (DAP), Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo a Desastres, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de Inclusión Social, EDU, ISVIMED, Secretaría de Desarrollo Económico y demás entidades del sector público.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Medellín es una ciudad densamente urbanizada, con expansión informal en laderas y zonas de riesgo por movimientos en masa, cambios en los patrones de lluvia, inundaciones y proximidad a quebradas.

Alta presencia de asentamientos consolidados con elevada vulnerabilidad socioeconómica, informalidad en la tenencia del suelo y actividades económicas de subsistencia.

La PPPMAEP surge para enfrentar los impactos de grandes proyectos urbanos y de gestión del riesgo sobre moradores y sus medios de vida.

Anteriormente el programa consistía en entregar un subsidio permanente a las familias afectadas hasta que se les entregara una vivienda definitiva, sin embargo, el proceso era poco sostenible y evoluciona al proceso actual.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

La PPPMAEP establece un proceso integral de protección y reasentamiento para personas y actividades económicas afectadas por proyectos públicos o por riesgos no mitigables.

El Anexo 5 – Proceso de Reasentamiento define fases de: alistamiento institucional, caracterización social y económica, valoración socioeconómica integral (VSEI), diseño del Plan de Gestión Social (PGS), implementación, compensaciones, restablecimiento de medios de vida y seguimiento post relocalización.

El proceso se basa en enfoque de derechos, sostenibilidad social y protección de actividades económicas.

La política se aplica en proyectos de infraestructura estratégicos y en escenarios de riesgo.

"A las familias se les ofrece entre 3 y 18 meses de arrendamiento, e ingresan a un proyecto de acompañamiento donde se les enseña cómo actúa el proceso que necesitan para conseguir una vivienda definitiva, segura y digna. Pero ya no entregan vivienda 100% subsidiada". (Vasquez & Luna, 2026) Se les brinda capacitación y apoyo en procesos de empleabilidad para que puedan acceder a un crédito de vivienda.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Acorde al plan de desarrollo 2020 -2023, Medellín reportó más de 12.000 hogares caracterizados en el proceso de protección a moradores y miles de hogares acompañados en reasentamientos asociados a proyectos urbanos (particularmente en renovación urbana y gestión del riesgo).

Medellín cuenta con un marco normativo robusto y estandarizado para reasentamientos, con enfoque de derechos y protección económica.

La política ha permitido ordenar y estandarizar procesos antes fragmentados, mejorar la trazabilidad, fortalecer la participación comunitaria, incorporar enfoque de derechos y reducir impactos negativos de proyectos urbanos.

Se pasa de un modelo asistencial de entrega de vivienda 100% subsidiada a un modelo más sostenible de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades financieras para el acceso a vivienda digna.

Se avanza hacia una institucionalización del reasentamiento como componente obligatorio de la planificación urbana y la gestión del riesgo.

Mayor protección de moradores como sujetos de derechos.

Reducción de impactos negativos de proyectos urbanos.

Fortalecimiento de la participación comunitaria y la transparencia.

Transición de un modelo asistencial a uno basado en fortalecimiento de capacidades financieras para acceso a vivienda digna.

Avances en la protección de actividades económicas y en la formalización.

Mayor articulación con programas de empleo y emprendimiento (aunque aún insuficiente).

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

La PPPMAEP se fundamenta en el reconocimiento de los moradores como sujetos de derechos y en la participación activa en todas las fases del reasentamiento: información, consulta, concertación y seguimiento.

En este proceso las Mesas Institucional – Comunitarias son fundamentales para fortalecer la confianza y la transparencia.

El Proceso de Reasentamiento enfatiza en el relacionamiento permanente con moradores y actividades económicas para garantizar el reconocimiento, protección y sostenibilidad de sus modos y medios de vida.

Se implementan estrategias de relacionamiento social, acompañamiento psicosocial, participación en alternativas de reasentamiento y protección de redes comunitarias.

La política prohíbe el desplazamiento forzado y exige medidas para evitar rupturas del tejido social y económico.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

Marco normativo específico para protección de moradores y actividades económicas (PPPMAEP y decretos reglamentarios).

Anexos técnicos detallados, especialmente el Anexo 5 que hace referencia al Proceso de Reasentamiento y que ordena el proceso.

Sistema de gobernanza intersectorial (CIDEPP, Mesas Técnicas, Mesas Institucional–Comunitarias).

Valoración Socioeconómica Integral (VSEI) como herramienta para definir impactos y compensaciones.

Planes de Gestión Social con enfoque de derechos y sostenibilidad.

Protección explícita de actividades económicas, incluyendo reconversión y formalización.

Articulación con el POT y proyectos urbanos, integrando reasentamiento en la planificación.

Modelo de acompañamiento para acceso a vivienda basado en fortalecimiento financiero, no solo subsidios.

Su potencial de escalamiento radica en la combinación del enfoque de derechos, participación, protección de medios de vida y articulación interinstitucional, aplicable a contextos de proyectos urbanos, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

7. LECCIONES APRENDIDAS

La estandarización normativa mejora la calidad y transparencia de los procesos.

La concurrencia institucional es clave, pero requiere alineación de cronogramas entre obras y procesos sociales.

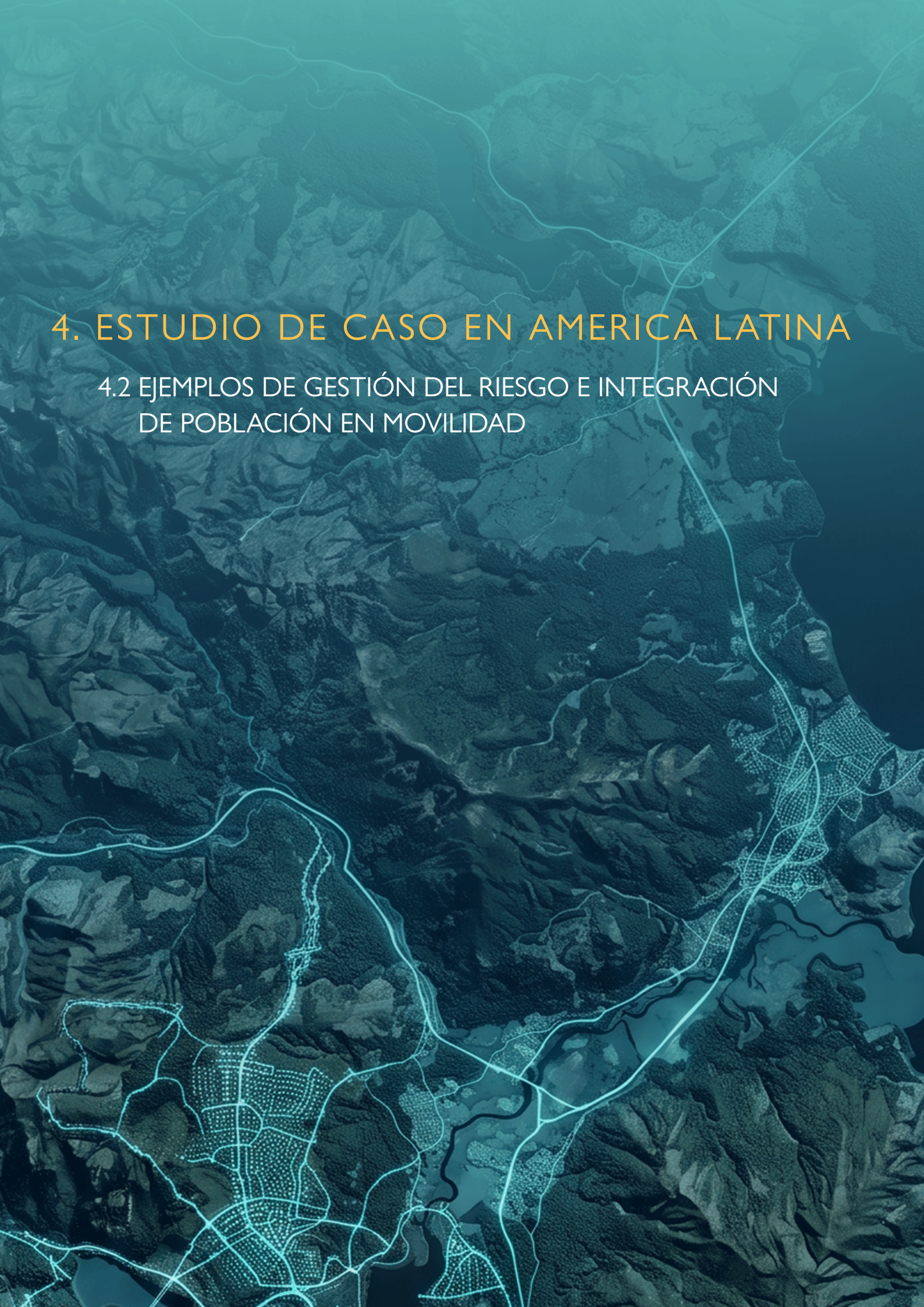
La protección de medios de vida sigue siendo el componente más desafiante y requiere mayor articulación con políticas de empleo.

El enfoque de derechos debe traducirse en prácticas cotidianas en territorio, lo cual exige equipos técnicos fortalecidos.

La presencia de crimen organizado en algunos territorios genera riesgos adicionales para la gestión del suelo y la protección de moradores.

Se necesitan indicadores robustos y un seguimiento en profundidad post relocalización.

La transición hacia modelos de acceso a vivienda mediante crédito requiere acompañamiento intensivo y educación financiera.



4. ESTUDIO DE CASO EN AMERICA LATINA

4.2 EJEMPLOS DE GESTIÓN DEL RIESGO E INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN EN MOVILIDAD

GESTIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE EN UPALA, COSTA RICA

La experiencia de Upala en gestión del riesgo y atención a emergencias representa un caso interesante en cuanto a articulación local en territorios rurales y fronterizos altamente expuestos a amenazas hidrometeorológicas en Costa Rica. Tras el impacto devastador del huracán Otto en 2016, el cantón fortaleció su Comisión Municipal de Emergencias y consolidó un modelo operativo basado en comités comunales, monitoreo permanente de ríos, activación de mesas interinstitucionales y coordinación estrecha con la Comisión Nacional de Emergencias. En un territorio marcado por inundaciones recurrentes, desbordamientos, deslizamientos y episodios de sequía, Upala ha avanzado hacia un enfoque más preventivo, incorporando educación comunitaria, obras resilientes y protocolos de evacuación. Su condición fronteriza con Nicaragua añade una capa adicional de complejidad: la municipalidad atiende de manera regular a población migrante —histórica, asentada y en tránsito— integrándola sin distinción en los sistemas de alerta, albergues y mecanismos de respuesta. Este caso evidencia cómo un gobierno local con recursos limitados puede construir capacidades institucionales, fortalecer resiliencia comunitaria y gestionar emergencias en un contexto de alta vulnerabilidad climática y movilidad humana.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Gestión del riesgo, evacuación, movilidad humana y atención a emergencias en el cantón de Upala, Costa Rica.

Tipo
Gestión reactiva y preventiva ante amenazas hidrometeorológicas; atención a población migrante en contexto fronterizo; ordenamiento territorial con enfoque de riesgo.

Periodo:
2016–presente.

Instituciones responsables:
Municipalidad de Upala, Comisión Municipal de Emergencias (CME), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Salud, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de la Producción (CNP), Cruz Roja, Bomberos, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), OIM, ACNUR.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Upala es un cantón de la provincia de Alajuela, fronterizo con Nicaragua, con zonas bajas y llanas altamente expuestas a inundaciones, desbordamientos, anegamientos, deslizamientos y sequías.

Es una región con presencia histórica y constante de población migrante nicaragüense (asentada y en tránsito), así como otras poblaciones en tránsito hacia el norte del continente.

Su actividad económica está basada en agricultura y ganadería, lo que la hace vulnerable a eventos extremos.

Además, tiene amplias zonas fronterizas bajo administración de SINAC que limitan la acción municipal.

El huracán Otto (2016) marcó un punto de inflexión, evidenciando la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo, mejorar la planificación territorial y avanzar hacia un enfoque más preventivo y comunitario.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

El proceso de gestión del riesgo y atención a emergencias en Upala se estructura alrededor de la Comisión Municipal de Emergencias (CME), órgano legalmente establecido por la Ley Nacional de Gestión del Riesgo, que coordina la preparación, respuesta y recuperación ante amenazas hidrometeorológicas, deslizamientos, sequías y eventos extremos como el huracán Otto (2016). La CME opera mediante un modelo mixto reactivo–preventivo, que combina monitoreo permanente, activación de comités comunales, inspecciones de daños, gestión de albergues y articulación interinstitucional con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y otras instituciones sectoriales.

El proceso inicia con la activación de alertas del Sistema Nacional (verde, amarilla, naranja, roja), que detonan acciones de vigilancia, comunicación con comunidades, monitoreo de ríos y activación del Centro Operativo de Emergencias. La CME trabaja mediante mesas funcionales (social, logística, productiva), que elaboran informes de situación y coordinan apoyos para personas, viviendas, infraestructura y medios de vida afectados. Una de las mesas, es la mesa productiva, por ejemplo, que articula con el MAG y el CNP para evaluar daños en fincas, pastos, sistemas de riego y producción agrícola.

En paralelo, Upala avanza hacia un enfoque más preventivo y territorial, impulsando educación comunitaria, fortalecimiento de comités comunales, elaboración de protocolos, simulacros y obras resilientes. El Plan Regulador de Upala incorpora mapas de riesgo, zonificación, condicionamientos de uso de suelo y un visor geográfico que permite identificar áreas expuestas a inundaciones, deslizamientos y anegamientos. Este instrumento es clave para evitar nuevas construcciones en zonas de riesgo y para orientar decisiones de evacuación y permisos constructivos.

La municipalidad también ha desarrollado infraestructura resiliente, como el parque central elevado, construido un metro por encima del nivel previo para convivir con inundaciones, y la reubicación de instituciones críticas (Cruz Roja, Bomberos) hacia zonas seguras. En comunidades fronterizas como Delicias y México, se han construido equipamientos multifuncionales —como el salón comunal–albergue— que sirven como centros de evacuación y espacios comunitarios.

Un componente distintivo del proceso es la atención a población migrante, histórica y en tránsito, que se integra plenamente en los protocolos de emergencia. La Política de Movilidad Humana de Upala 2024–2034 formaliza este enfoque, estableciendo lineamientos para garantizar acceso a servicios, protección, información y atención diferenciada en emergencias. Aunque no existen programas exclusivos para migrantes, la municipalidad aplica un principio de no discriminación, asegurando que albergues, insumos, alimentación y protocolos de evacuación estén disponibles para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

El proceso también incluye coordinación con SINAC en la franja fronteriza de 2 km, donde la municipalidad no tiene competencia directa. En estas zonas, la gestión del riesgo se realiza mediante reportes, inspecciones y derivación institucional, especialmente ante construcciones informales o asentamientos expuestos.

Finalmente, el proceso incorpora aprendizajes post Otto, como la necesidad de convivir con la amenaza, fortalecer infraestructura, mejorar la planificación territorial y avanzar hacia la creación de un gestor de riesgo municipal, que permita consolidar un enfoque más preventivo, comunitario y basado en resiliencia.

4. IMPACTO O RESULTADOS

- Consolidación de una CME fortalecida, con experiencia acumulada post Otto.
- Mayor articulación interinstitucional y territorial.
- Creación de la Política de Movilidad Humana 2024–2034 como marco innovador para municipios fronterizos.
- Uso efectivo del Plan Regulador para evitar nuevas construcciones en zonas de riesgo.
- Infraestructura pública más resiliente (parque central elevado, albergues multifuncionales).
- Reubicación estratégica de instituciones críticas.
- Integración de población migrante en protocolos de emergencia bajo principio de no discriminación.

Fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante comités comunales.

Mejora en tiempos de respuesta y coordinación durante eventos extremos.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

La Comisión Municipal de Emergencias (CME) se apoya en una red activa de Comités Comunales de Emergencia (CCE), integrados por líderes locales, docentes, asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres, productores y personas voluntarias. Estos comités son la primera línea de alerta, monitoreo y respuesta, y cumplen un rol fundamental en la activación temprana de evacuaciones, la identificación de familias vulnerables y la comunicación directa con el Centro Operativo de Emergencias.

La municipalidad impulsa procesos de educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades, especialmente en escuelas y organizaciones locales, para promover una cultura de prevención y convivencia con la amenaza.

En comunidades fronterizas como Delicias, México y La Cruz, la participación comunitaria se articula también con la dinámica migratoria, ya que estas zonas concentran población asentada y en tránsito. La Política de Movilidad Humana 2024–2034 reconoce explícitamente el rol de las comunidades como espacios de acogida, integración y apoyo mutuo, y promueve mecanismos de participación para que personas en movilidad puedan involucrarse en actividades comunales, comités locales y procesos de preparación ante emergencias. El enfoque de derechos garantiza que todas las personas —independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio— sean incluidas en los protocolos de evacuación, albergues, distribución de insumos y acciones de protección.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

El modelo de gobernanza interinstitucional, basado en la Comisión Municipal de Emergencias y sus mesas funcionales (social, logística, productiva), permite articular capacidades dispersas, coordinar acciones en tiempo real y generar informes de situación que facilitan la toma de decisiones y la activación de recursos nacionales.

La red de comités comunales de emergencia, que funcionan como la primera línea de alerta, monitoreo y respuesta. Su rol en la identificación de puntos críticos, activación de evacuaciones y gestión de albergues demuestra que la resiliencia comunitaria es un componente esencial en territorios rurales y dispersos.

El uso del Plan Regulador como herramienta de gestión del riesgo que integra mapas de amenaza, condicionamientos de uso de suelo y un visor geográfico accesible, permite tomar decisiones informadas sobre permisos de construcción, obras de mitigación y planificación territorial. Este enfoque demuestra que incluso municipios con recursos limitados pueden incorporar criterios de riesgo en su ordenamiento territorial.

La Política de Movilidad Humana 2024–2034 constituye un instrumento innovador y replicable para municipios fronterizos o con presencia significativa de población en movilidad. Su enfoque de derechos, integración, acceso a servicios y atención en emergencias ofrece un marco institucional que puede ser adaptado por otros gobiernos locales que enfrentan dinámicas similares.

Integración de población migrante en protocolos de emergencia bajo principio de no discriminación.

Coordinación con instituciones nacionales (CNE, SINAC, IMN) para compensar limitaciones municipales.

7. LECCIONES APRENDIDAS

El Municipio no cuenta con un registro histórico que consolide cuantas familias han sido atendidas por eventos climáticos, evidenciando la urgencia de sistemas de datos unificados.

La gestión del riesgo requiere institucionalidad permanente, no solo respuesta reactiva.

La ausencia de un gestor de riesgo municipal limita la prevención y el seguimiento.

La capacidad presupuestaria municipal es insuficiente; se depende de CNE y cooperación.

Persisten vulnerabilidades en comunidades que reconstruyen viviendas en zonas de riesgo por falta de alternativas habitacionales.

La informalidad en la tenencia del suelo dificulta la protección y el acceso a subsidios.

La atención a población migrante debe fortalecerse con sistemas de caracterización y planificación anticipada.

La resiliencia comunitaria es clave: los Comités Comunales de Emergencias son un activo estratégico del cantón.

RESPUESTA A AMENAZAS AMBIENTALES CON PERSPECTIVA DE MOVILIDAD EN CAMOTÁN, GUATEMALA

El municipio de Camotán está ubicado en el departamento de Chiquimula, en Guatemala, que se caracteriza por altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, incluyendo tasas elevadas de desnutrición crónica, acceso limitado a servicios básicos y elevada dependencia de la agricultura de subsistencia. Al estar ubicado en el corredor seco centroamericano, es un territorio afectado de forma recurrente por sequias, además de sufrir inundaciones y deslizamientos. El municipio de Camotán ha desarrollado capacidades institucionales y comunitarias para poder responder a estos eventos, por medio de alertas tempranas, mecanismos de evacuación, activación de albergues y protección de los medios de vida. Sus iniciativas no solo atienen a poblaciones locales, sino que también integran poblaciones en sus diferentes formas de movilidad.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Gestión integral del riesgo, sistemas comunitarios de alerta temprana, evacuación y atención a población migrante y retornada

Municipio:
Camotán, Guatemala

Tipo:
Gestión preventiva y reactiva ante sequías, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y estructurales; integración de población migrante y retornada en protocolos de emergencia.

Periodo:
2020 – actualidad

Instituciones responsables:
Municipalidad de Camotán, Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo (DMGIR), Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED), Coordinadoras Locales (COLRED), Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODES), Secretaría de Bienestar Social (SBS), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Trabajo, Gobernación, Defensa Civil, Cruz Roja, ONG.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Camotán es un municipio rural del departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, que presenta una alta exposición a amenazas climáticas e importantes vulnerabilidades socioeconómicas en su población. Las zonas altas presentan riesgo de deslizamientos, mientras que las comunidades en las zonas bajas y cercanas a ríos presentan inundaciones recurrentes. A su vez, por su ubicación geográfica, se presentan sequias severas que generan afectaciones en los cultivos de maíz y frijol.

La económica local es predominantemente agrícola, y presenta migración interna temporal para la producción de café y caña. Además, se originan flujos migratorios de salida desde el municipio. Por otro lado, en los últimos años, el municipio ha tenido que dar respuesta a procesos de retorno y atender a la situación de personas en tránsito. Las comunidades más vulnerables se caracterizan por elevados niveles de pobreza, bajos niveles educativos (4 de cada 10 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir), viviendas construidas con materiales de baja calidad (7 de cada 10 viviendas son de piso de tierra (Cooperación Española, Paz y Desarrollo, ASEDE, 2023)), y exposición directa a amenazas climáticas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

La gestión del riesgo en Camotán está organizada por medio de la DMGIR y la CONRED, que operan conforme al Plan Nacional de Respuesta (2024). En los últimos años, el municipio ha liderado el proceso de acreditación de 19 Coordinadores Locales (COLRED) de 30 existentes, fortaleciendo su articulación. Esto se ha realizado mediante procesos comunitarios de diagnóstico del territorio, sensibilización a la población, organización de los grupos, capacitación y compromiso de los coordinadores locales. Las COLRED son fundamentales al ser quienes emiten las primeras alertas, monitorean el entorno y coordinan desde lo local los procesos de evacuación. En estas estructuras de participación comunitaria se integran personas migrantes y retornadas.

El sistema comunitario de alerta temprana de Camotán cuenta con pluviómetros, y otros instrumentos para el monitoreo de las precipitaciones y anticipar inundaciones con 25 a 30 min de antelación. Utilizando estos mecanismos, se activan alertas comunitarias y se ejecutan evacuaciones de la población. Este mecanismo se implementó durante las tormentas de Eta e Iota, de las comunidades de la Lima, Chatoncito y Volcancito.

El Municipio ha desarrollado en Plan Municipal de Reducción de Riesgos de Desastres (PMRRD) que está basado en 10 ejes de resiliencia. Además, creó el Fondo Municipal de Desastres, que en la actualidad cuenta con un presupuesto disponible de Q50.000 (equivalente a 6.500 dólares de Estados Unidos) financiado con fondos propios del municipio, que permite financiar acciones anticipatorias en las comunidades, así como evaluaciones de desastres. Con esos fondos han desarrollado simulacros durante el 2026 para capacitar a los miembros de COLRED. A su vez, los miembros de la COLRED hacen reportes de pérdidas y daños al municipio y en eventos de sequía, por ejemplo, el municipio aporta con dotaciones de alimentos.

Los protocolos de evacuación y albergues son inclusivos y no discriminatorios, por lo que todas las personas sin distinción de su nacionalidad o estatus migratorio reciben atención.

El municipio ha desarrollado, además, procesos de inclusión económica, por medio de programas de capacitación técnica y emprendimientos agrícolas.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Implementación de un sistema de alerta temprana, que permite anticipar inundaciones y activar evacuaciones, en contextos de baja escolaridad, pobreza extrema, sumado a un importante porcentaje de población indígena.

Protocolos en albergues que garantizan atención diferenciada a mujeres, niñeces y personas con alguna discapacidad.

Integración económica de la población retornada por medio de programas de capacitación técnica en buenas prácticas productivas y emprendimientos agrícolas, por medio de la entrega de semillas e insumos productivos.

Reducción de procesos de migración forzada en mujeres, por medio de grupos de ahorro comunitario (programa CREA), con lo cual mantienen la economía local. En comunidades de 400 familias hay hasta 20 grupos de ahorro, estos grupos son acreditados por el Municipio, y tienen la capacidad de entregar créditos a tasas más bajas. Este programa permite fortalecer el tejido social y la resiliencia económica con enfoque de género, tiene 4 años de existencia.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

El Municipio ha hecho de la participación comunitaria un elemento central en su modelo de gestión del riesgo, por medio de las COLRED y los COCODES, que son los primeros actores en alertar los eventos y dar respuesta a las comunidades. La gobernanza de estas estructuras se articula mediante reuniones periódicas con el Consejo Municipal, donde se discuten alertas, se reporta los daños y pérdidas.

El enfoque de derechos plasmado en la Política Pública Municipal de Movilidad Humana busca asegurar que todas las personas sin importar su condición migratoria sean incluidas en las evacuaciones, distribución de insumos y procesos de recuperación.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

Sistema de alerta temprana comunitario, con la utilización se herramientas de bajo costo (como los pluviómetros).

La creación de un Fondo Municipal de Desastres, que está disponible para prevención, mitigación y resiliencias.

La integración de la movilidad humana en la gestión del riesgo, por medio de estructuras comunitarias.

La coordinación con los COCODES en la identificación de familias migrantes y retornadas en las zonas de riesgo.

7. LECCIONES APRENDIDAS
La existencia de estructuras comunitarias facilita la integración de población migrante en gestión del riesgo..
La creación de programas que faciliten la resiliencia económica, la prevención de la migración forzada y el fortalecimiento de la capacidad de recuperación post evento de las comunidades.
Se requieren sistemas de información que faciliten el registro y análisis de datos para mejorar la planificación.

MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA Y GESTIÓN DEL RIESGO EN TAPACHULA, MÉXICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Gestión integral del riesgo, alerta temprana, evacuación y atención a población migrante.

Municipio:
Tapachula, Chiapas, México

Tipo:
gestión preventiva y reactiva ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, químico tecnológicos, sanitarios y socio organizativos; integración explícita de población migrante en protocolos de emergencia, comunicación de alertas y estructuras comunitarias.

Periodo:
2010 – actualidad

Instituciones responsables:
Secretaría Municipal de Protección Civil (direcciones de Identificación y Análisis de Riesgos, Reducción de Riesgos, Administración de Emergencias, Desarrollo Sostenible y Resiliencia, Administración Tecnológica); Ventanilla Tapachula (Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo); COMAR; Instituto Nacional de Migración (INM); Marina; Guardia Nacional; Secretaría de Seguridad Pública Municipal; DIF Municipal; organizaciones comunitarias; OIM; ACNUR.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Tapachula es la principal cuidad de recepción de población migrante en la frontera sur de México, por lo que presenta un importante flujo de personas, pero a su vez es un territorio expuesto a eventos hidrometeorológicos (lluvias intensas, vientos huracanados, inundaciones súbitas, desbordamientos del rio Texcuyoapan.

Tapachula recibe más del 60% de las solicitudes de refugio del país, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, combinando movilidad interna, migración transfronteriza y población que decide permanecer en la ciudad para regularizar su situación. Estos flujos de personas generan presiones en servicios básicos y genera nuevas vulnerabilidades en comunidades marginadas donde se concentran las personas migrantes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

La gestión del riesgo en Tapachula se estructura bajo un modelo de gestión integral, reforzado por la Ley para la Gestión Integral y Protección Civil del Estado de Chiapas (2024). La Secretaría Municipal de Protección Civil opera con cinco direcciones especializadas que cubren todo el ciclo del riesgo: identificación de amenazas, reducción de riesgos, administración de emergencias, resiliencia comunitaria y sistemas tecnológicos de alerta temprana.

Tapachula cuenta con 166 Comités Humanistas de Protección Civil, integrados por 10 personas cada uno, que tienen el rol de ser la primera línea de alerta, monitoreo y comunicación con la municipalidad, además participan en procesos preventivos, difusión de alertas y apoyo en evacuaciones, en estos espacios participan personas migrantes y en las zonas altas han tenido casos de población transfronteriza involucrada.

El municipio reconoce la movilidad humana como un fenómeno socio-organizativo, que afecta la gestión del riesgo. La Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo del Ayuntamiento Municipal conocido como Ventanilla Tapachula, se encarga de articular acciones de prevención, comunicación, atención humanitaria y gestión de emergencias para población migrante, por medio de una mesa interinstitucional con más de 42 actores (organizaciones civiles, instituciones federales y estatales, entre otras). Esta mesa interinstitucional tiene la responsabilidad de trabajar en la asistencia, atención al tema migratorio y el fortalecimiento de políticas públicas. Además, ayudan a difundir acciones de protección vinculadas a eventos climáticos extremos u otras acciones de prevención del riesgo, especialmente en las comunidades de ingresos más bajos que son donde se asientan las poblaciones migrantes.

Además, realizan acciones de sensibilización, cada semana salen al parque central de la localidad, para que las personas migrantes identifiquen la oficina y se acerquen al ayuntamiento para brindarles información y acompañamiento en su proceso de movilidad. En eventos de lluvia intensa, inundaciones o desbordamientos, Protección Civil activa un PSO (Procedimiento de Seguridad Operativa) en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública y cuerpos de emergencia. En 2023, se evacuaron 23 personas migrantes atrapadas por el desbordamiento del río Texcuyoapan, que nunca habían vivido procesos de desbordamientos de ríos, y por tanto no supieron atender a los llamados de prevención.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Integración explícita de población migrante en protocolos de emergencia, alertas y evacuaciones.

Funcionamiento de 166 comités comunitarios, algunos con personas migrantes o trabajadores transfronterizos.

Sistema de alerta temprana con altavoces, estaciones meteorológicas y comunicación comunitaria.

Identificación de 54 colonias vulnerables.

Mesa interinstitucional con 42 actores para coordinar movilidad humana y gestión del riesgo.

Equipamiento anual de comités (radios, herramientas…).

Comunicación continua vía radio y WhatsApp entre comités y Protección Civil.

Reconocimiento legal del derecho universal a la protección civil para todas las personas en Chiapas, independientemente de nacionalidad o estatus migratorio.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

El municipio facilita la participación comunitaria por medio de los Comités Humanistas de Protección Civil, que son estructuras voluntarias que reciben capacitación en gestión del riesgo, administración de refugios, primeros auxilios y comunicación de alertas. En algunos comités en zonas altas participan trabajadores transfronterizos y familias migrantes asentadas.

Los comités reportan diariamente condiciones climáticas, riesgos y actividades preventivas, fortaleciendo la resiliencia local.
La Constitución del Estado de Chiapas garantiza el derecho universal a la protección civil, lo que obliga a incluir a población migrante en todas las acciones de prevención, evacuación y atención.

Por su parte, Ventanilla Tapachula realiza mapeos dinámicos en parques y zonas de concentración migrante para identificar vulnerabilidades y difundir información preventiva.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

Modelo de gestión integral del riesgo con cinco direcciones especializadas.

Comités comunitarios sin distinción de nacionalidad, integrando población migrante asentada.

Sistema de alerta temprana con altavoces, estaciones meteorológicas y comunicación comunitaria.

Mesa interinstitucional de movilidad humana con más de 42 actores.

Equipamiento anual de comités.

Mapeo dinámico de zonas de concentración migrante para difusión de alertas.

Reconocimiento legal del derecho universal a la protección civil.

7. LECCIONES APRENDIDAS
La movilidad humana debe considerarse un factor estructural de riesgo, no un fenómeno aislado.
La integración de población migrante en comités comunitarios mejora la comunicación y la respuesta.
La comunicación multicanal (altavoces, radios, WhatsApp, periodistas aliados) es clave para llegar a población migrante.
Las evacuaciones preventivas son difíciles por apego al patrimonio, tanto en población local como migrante.
La coordinación interinstitucional es indispensable para atender flujos masivos y emergencias simultáneas.
La resiliencia comunitaria requiere equipamiento, capacitación continua y presencia territorial.

FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS EN HEREDIA, COSTA RICA

El cantón de Heredia, en Costa Rica, ha desarrollado una experiencia innovadora en la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático integrando a población migrante. Esta experiencia surge a partir de un proceso comunitario en Guararí, una comunidad urbana marginal con significativa vulnerabilidad socioambiental e importante presencia de población migrante. La municipalidad creó un modelo de formación, comunicación y participación que integra el fortalecimiento de capacidades y campañas audiovisuales, que son protagonizadas por personajes migrantes: Valijita, Julia y Miguel. La iniciativa busca promover la inclusión y fortalecer la resiliencia comunitaria y hace de la gestión del riesgo un espacio para integración social.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Integración de población migrante en gestión del riesgo mediante formación comunitaria, campañas educativas y sistemas de alerta temprana.

Municipio:
Heredia, Costa Rica.

Institución líder:
Municipalidad de Heredia – Dirección de Inversión Pública, Gestión del Riesgo.

Periodo:
2020–2026 (continuidad en curso).

Actores clave:
Municipalidad de Heredia; OIM; Cadena; Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE); Ministerio de Educación Pública (MEP); Cruz Roja Costarricense; Ministerio de Salud; Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Tipo de movilidad: Migración interna e internacional; población migrante asentada y en tránsito; familias en asentamientos informales.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

El cantón de Heredia enfrenta amenazas recurrentes vinculadas a inundaciones y deslizamientos, especialmente en las comunidades urbano-marginales asentadas en zonas de riesgo, como es el caso de Guararí. La presencia de asentamientos informales y la movilidad constante de la población migrante incrementa la exposición a riesgos.

La municipalidad cuenta con un Comité Municipal de Emergencias, que opera bajo la Ley 8488, y cuenta con diferentes mesas operativas para la respuesta (primera respuesta, protección y asistencia humanitaria, infraestructura y servicios y salud y saneamiento).

Por medio de apoyos de cooperación, el municipio ha desarrollado modelaciones científicas de infraestructura critica, lo cual le permite anticipar impactos y orientar acciones de planificación y respuesta a emergencias.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

a. Fortalecimiento de capacidades comunitarias: Por medio de procesos de capacitación integral para líderes y lideresas en gestión del riesgo con participación activa de población migrante, con talleres sobre derechos humanos, regularización migratoria y acceso a servicios. Formación en primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, evacuación y preparación comunitaria.

b. Creación de personajes migrantes para combatir la xenofobia (Valijita, Julia y Miguel). Son personajes de una historia que migran desde Nicaragua y aportan conocimientos en gestión del riesgo a la comunidad. El objetivo radica en promover la inclusión, resiliencia y convivencia, evidenciando que las personas migrantes tienen conocimientos y experiencias que aportan a las comunidades.

c. Campañas audiovisuales y materiales educativos: Entre 2021 y 2025 se desarrollaron múltiples videos y campañas:

- » Las Aventuras con mi Valijita (prevención COVID-19, integración migrante).
- » Plan Familiar de Emergencias (rutas de evacuación, croquis, simulacro nacional).
- » Acciones que el planeta ama (adaptación al cambio climático).
- » Todo Bajo Control (prevención de desastres con estética de videojuegos).
- » Los videos han sido traducidos al inglés, utilizados en centros educativos y compartidos a nivel nacional e internacional. Uno de ellos ganó un premio nacional y fue presentado ante Naciones Unidas.

d. Sistemas de alerta temprana y comunicación comunitaria, por medio de grupos de WhatsApp con lideres comunales y del programa Ojos y Oídos de la Policía Municipal, difunden alertas y los miembros de los grupos replican la información con otras familias.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Integración efectiva de población migrante en procesos de gestión del riesgo.

Reducción de xenofobia mediante campañas educativas y narrativas inclusivas.

Formación de más de 100 personas en Guararí (estimación basada en talleres y simulacros).

Videos utilizados en centros educativos y compartidos a nivel nacional e internacional.

Premio nacional por el video de adaptación al cambio climático.

Modelación científica de infraestructura crítica para amenazas climáticas.

Fortalecimiento del Comité Municipal de Emergencias y de la cultura preventiva.

Creación de una marca institucional reconocida: Valijita, Julia y Miguel.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

La municipalidad trabaja con enfoque de derechos humanos, explicando a población migrante sus derechos en Costa Rica, rutas de regularización, acceso a servicios y mecanismos de participación comunitaria.

Además, hace un diseño de las capacitaciones que permite abordar los temores y prejuicios de la población. La participación se sostiene mediante confianza de la población en el municipio y difusión de acciones por medio de boca a boca.

Los talleres utilizan metodologías lúdicas y aprendizaje entre pares, promoviendo que las personas se apropien de los espacios.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

Desarrollo de materiales de capacitación con el uso de personajes migrantes para combatir xenofobia y promover inclusión.

Creación de campañas audiovisuales accesibles, traducidas y adaptadas para niñez, las cuales se presentan en centros educativos y permiten la generación de conocimientos sobre gestión del riesgo.

Desarrollo de programas de formación comunitaria integral con enfoque de derechos.

Sistemas de alerta temprana basados en redes comunitarias.

Coordinación interinstitucional con cooperación internacional.

Implementación de acciones de modelación científica para orientar decisiones de adaptación climática.

7. LECCIONES APRENDIDAS
La inclusión de población migrante fortalece la resiliencia comunitaria, además la creación de confianza es clave para la participación; pero requiere tiempo y presencia territorial.
La xenofobia puede abordarse mediante narrativas positivas y educación.
La cooperación internacional es fundamental para sostener procesos formativos, pero a su vez representa un reto si no existe continuidad presupuestaria para el escalamiento.
La creatividad (videos, botargas, cuentos) es una herramienta poderosa para la gestión del riesgo, que facilita llegar a todos los públicos y el posicionamiento de temas clave.
Es clave para los municipios institucionalizar los procesos formativos, para que se garantice su sostenibilidad a mediano y largo plazo.

ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESPLAZAMIENTOS EN CACAHOATÁN, MÉXICO

Cacahoatán, ubicado en la región del Soconusco y fronterizo con Guatemala, enfrenta amenazas climáticas recurrentes como lluvias intensas, trombas, deslizamientos y saturación de los suelos. Aunque el flujo migratorio internacional no ingresa directamente por el municipio, Cacahoatán presenta movilidad interna vinculada a actividades agrícolas y casos puntuales de desplazamiento por afectaciones climáticas. La gestión del riesgo se articula mediante comités de protección civil, refugios temporales y coordinación con instituciones estatales y federales, complementada por el apoyo de la OIM en capacitación comunitaria y herramientas de alerta. El municipio evidencia esfuerzos significativos para fortalecer capacidades locales, aunque enfrenta limitaciones técnicas, presupuestarias y de comunicación que condicionan la respuesta ante emergencias y la atención a poblaciones vulnerables.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Gestión del riesgo ante lluvias, deslizamientos y afectaciones agrícolas con situaciones de desplazamientos.

Municipio:
Cacahoatán, Chiapas, México.

Tipo de movilidad:
Migración interna vinculada a agricultura; desplazamientos puntuales por afectaciones climáticas; movilidad internacional en tránsito por municipios vecinos.

Periodo:
2020–2026.

Instituciones responsables:
Secretaría Municipal de Protección Civil; Comités Humanistas de Protección Civil; Marina; Guardia Nacional; Ejército; Delegación Estatal de Protección Civil; OIM.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Cacahoatán es un municipio tropical húmedo, con alta vegetación, múltiples ríos y zonas montañosas. Su clima favorece la agricultura, con producción de café, plátano, cacao, rambután y maíz. Sin embargo, también es un territorio que presenta alta vulnerabilidad a lluvias intensas y torrenciales, saturación de suelos, deslizamientos y trombas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

Gestión del riesgo por medio de la creación de un Comité Municipal de Emergencia, con mesas operativas de primera respuesta, asistencia humanitaria, infraestructura y salud y saneamiento.

Se cuenta con refugios temporales en la cabecera municipal y varias comunidades. Ante eventos extremos, se ha desarrollado una serie de acciones de respuesta inmediata, como la limpieza de tinacos, la cloración de agua, la atención médica, distribución de láminas y despensas y la habilitación de refugios.

Cuentan con Comités Humanistas de Protección Civil, que están integrados por 10 personas voluntarias y son la primera línea de respuesta antes emergencias y se capacitan en primeros auxilios, uso de botiquines, protocolos de evacuación y comunicación comunitaria. Con el apoyo de la OIM, han fortalecido capacidades locales mediante la creación de comités en zonas vulnerables, capacitaciones técnicas, entrega de botiquines de primeros auxilios, mapas QR con ubicación de refugios temporales y apoyo en la realización de diagnósticos comunitarios.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Conformación y fortalecimiento de comités comunitarios en zonas vulnerables.

Implementación de refugios temporales y protocolos de evacuación.

Coordinación efectiva con Marina, Guardia Nacional, Ejército, Salud, DIF y SAPAM.

Capacitación comunitaria con apoyo de OIM.

Mapas QR de refugios temporales.

Atención a afectaciones agrícolas mediante insumos y apoyo institucional.

Sesiones interinstitucionales para temporada de lluvias (antes, durante y después).

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

La participación comunitaria se organiza mediante asambleas para conformar comités, voluntariado comunitario, grupos de WhatsApp para alertas y comunicación, coordinación con delegados. Aunque no existe participación explícita de población migrante internacional, sí se atienden desplazamientos internos por afectaciones climáticas

6. ELEMENTOS REPLICABLES

La creación de comités comunitarios voluntarios con capacitación continua.

Mapas QR de refugios temporales.

Coordinación interinstitucional para temporada de lluvias.

Uso de WhatsApp para alertas tempranas.

Apoyo agrícola post desastre (láminas, insumos, despensas).

Sesiones de gobernanza con tres niveles de gobierno.

7. LECCIONES APRENDIDAS

La comunicación comunitaria es clave para la respuesta rápida.

La capacitación técnica fortalece la resiliencia local.

La coordinación con OIM y dependencias estatales mejora la capacidad de respuesta.

La falta de radios y equipo limita la comunicación en zonas altas..

La movilidad interna agrícola requiere atención diferenciada.

La gestión del riesgo debe incluir diagnósticos más robustos e indicadores propios.

Se requiere fortalecer indicadores municipales de riesgo.



4. ESTUDIO DE CASO EN AMERICA LATINA

4.3 EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN EN EMPLEOS VERDES DE POBLACIÓN EN MOVILIDAD

INCLUSIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN SAO PAULO, BRASIL

Con más de medio millón de personas migrantes y refugiadas, y proyecciones que indican un aumento significativo de movilidad humana asociada al cambio climático hacia 2050, el municipio de Sao Paulo ha desarrollado una arquitectura institucional robusta que integra derechos humanos, inclusión socioeconómica y empleos verdes. A través de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía (SMDHC), la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SMDET), el Centro de Referencia y Atención al Inmigrante (CRAI), el Consejo Municipal de Inmigrantes (CMI) y programas como POT y CATE, São Paulo articula regularización migratoria, formación profesional, inserción laboral y políticas ambientales urbanas. La ciudad no solo garantiza igualdad de derechos, sino que impulsa rutas específicas de empleos verdes para población migrante —en parques, gestión de riesgos, agricultura urbana, movilidad eléctrica y construcción sostenible— convirtiéndose en un referente regional de transición justa con enfoque de movilidad humana.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Empleos verdes, trabajo decente e inclusión laboral de población migrante.

Municipio:
Ciudad de São Paulo, Brasil

Periodo:
2013–presente. .

Instituciones claves:
SMDHC (Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía), CPIPTD (Coordinación de Políticas para Inmigrantes y Promoción del Trabajo Decente), SMDET (Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo), CRAI, CMI, COMTRAE.

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Megaciudad con 12 millones de habitantes, alta desigualdad socioespacial y una elevada población migrante (660.000 permisos activos en el estado).

Las personas migrantes se concentran en sectores de baja remuneración, informalidad y vulnerabilidad, con barreras lingüísticas y de certificación profesional.

En un contexto de aumento de temperaturas, tormentas violentas repentinas, inundaciones y riesgos hídricos exacerbados por la hiperurbanización (Delgado Asad & Young, 2018), la ciudad de São Paulo impulsa una agenda de transición ecológica urbana, movilidad eléctrica, economía circular, mantenimiento de parques, gestión de residuos, infraestructura verde y defensa civil, generando oportunidades de empleos verdes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

São Paulo cuenta con un ecosistema institucional articulado que integra acciones de regularización migratoria, asistencia social y formación profesional para la población migrante. En materia de empleos verdes, el municipio se encuentra en una etapa de desarrollo de iniciativas que buscan incorporar este enfoque de manera progresiva. Y cuenta con un aparato institucional robusto para integrar a migrantes en el mercado laboral.

Cuenta con el CPIPTD que coordina políticas migratorias y de trabajo decente, al contar con un marco legal robusto a nivel nacional, que le facilita el reconocimiento de las poblaciones en movilidad.

Cuentan con el CRAI Oriana Jara, que ofrece orientación y acompañamiento para la regularización migratoria y documental, orientación sobre el acceso al sistema educativo brasileño, atención y orientación jurídica, social y psicológica, además de realizar derivaciones y articulaciones con la red de servicios públicos, de acuerdo con las necesidades de cada caso.

El SMDET ejecuta programas de empleo como POT (Operação Trabalho) que consiste en un programa de capacitación, de formación técnica y trabajo remunerados con ejes verdes (mantenimiento de parques, defensa civil, agricultura, desarrollo sostenible) y CATE que es un programa de intermediación laboral, con ferias de empleo y certificación profesional, sin embargo, tienen pendiente consolidar directrices en empleos verdes.

La municipalidad está elaborando un proyecto, llamado Novo Solo, que busca pilotear empleos verdes para personas migrantes en 3 rutas: educación ambiental y gestión del riesgo, construcción civil verde y energía y movilidad electica. Asimismo, en la fase de implementación facilitarán formación a las empresas sobre cuestiones migratorias/legislación, formarán a los migrantes sobre sus derechos.

Todo esto integra derechos humanos, trabajo decente y transición justo en un único marco operativo.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Más de 55.000 atenciones del CRAI Oriana Jara (2020–2026).

60.000 migrantes atendidos por año.

449 migrantes activos en POT.

615 migrantes en ferias CATE (2025–2026).

Migrantes integrados en programas de empleo verde con formación técnica y acompañamiento.

Reducción de vulnerabilidad laboral.

Mayor acceso a documentación, salud y asistencia social.

Fortalecimiento del CMI como órgano de participación.

Proyección de consolidación de un ecosistema municipal que integra migración, empleo y clima.

Promoción de una mayor articulación con el sector privado para empleos verdes.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

La Política Municipal para la Población Inmigrante (Ley 16.478/2016) garantiza igualdad de derechos, acceso a servicios, combate a la xenofobia y fomenta la participación social. La participación de personas migrantes en São Paulo es estructural, institucionalizada y vinculante. La ciudad ha construido un modelo donde la población migrante no solo accede a servicios, sino que participa en la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas.

El Consejo Municipal de Inmigrantes es un órgano paritario compuesto por representantes migrantes y del gobierno, elegido democráticamente por comunidades migrantes, deliberan sobre políticas públicas, evaluación de programas, recomendaciones normativas y control social.

El CRAI Oriana Jara ofrece atención integral, es un espacio comunitario, donde se brinda orientación en procesos de regularización, salud, asistencia social, apoyo psicológico, educación y orientación jurídica, se organizan actividades culturales, se realizan talleres. Cuentan con un CRAI Móvil que amplía la participación a las periferias de la ciudad.

Desde el municipio, los sectores de educación y formación del CRAI Oriana Jara y CPIPTD, capacitan al sector privado para contratar migrantes, resolver barreras documentales y promover interculturalidad.

Todos los programas tienen enfoque de derechos, promueven el acceso universal a salud, educación, vivienda, empleo y asistencia social.

Se evidencia que la participación migrante es estructural, no únicamente consultiva.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

El Centro de Referencia y Atención para Inmigrante (CRAI Oriana Jara) es un modelo replicable que puede comenzar como un centro pequeño con alianzas estratégicas orientado a: centralizar servicios clave (regularización, orientación jurídica, apoyo psicosocial, derivación laboral); brindar una "ventanilla única" para migrantes; además se puede replicar como órgano que desde los municipios articule con secretarías municipales más estratégicas dentro de la temática de movilidad y empleabilidad; por otro lado, es un modelo de gestión público–sociedad civil, que es replicable en municipios con recursos limitados; finalmente se puede reproducir la idea de que otros municipios creen una figura similar al CRAI Móvil, que lleva servicios a periferias, sobre todo en municipios con territorios extensos, población dispersa o dificultades de acceso a servicios en las periferias.

El Consejo Municipal de Inmigrantes (CMI) es otro mecanismo innovador de gobernanza participativa que se puede replicar desde otros municipios al ser:

- paritario (mitad migrantes, mitad gobierno);
- que tiene funciones reales de deliberación, monitoreo y evaluación;
- que fortalece la legitimidad de las políticas públicas;
- que permite que migrantes influyan en decisiones sobre empleo, vivienda, educación y transición ecológica.

Otro ejemplo replicable es el POT (Programa Operação Trabalho) que es un programa altamente replicable porque combina formación técnica y trabajo remunerado; tiene ejes verdes que pueden adaptarse a cualquier municipio, en términos de:

- mantenimiento de parques,
- gestión de riesgos,
- agricultura urbana,
- reciclaje y economía circular,
- educación ambiental;

Además, permite crear rutas específicas para migrantes e incluye acompañamiento psicosocial y seguimiento post–empleo.

El CATE ofrece un modelo replicable de ferias de empleo específicas para migrantes, certificación profesional, intermediación laboral con empresas, formación técnica en sectores verdes, articulación con programas de empleo público.

São Paulo demuestra que la migración puede gestionarse como un tema transversal, no como un "tema adicional", donde todas las secretarías deben adaptar sus servicios a migrantes, la gobernanza se articula mediante mesas intersecretariales y el sector privado participa activamente.

7. LECCIONES APRENDIDAS

El idioma y la revalidación de títulos son barreras críticas para la inserción laboral.

La documentación migratoria puede retrasar el acceso a empleo formal.

Falta un programa unificado que integre regularización + vivienda + empleos verdes.

Los cupos de POT y CATE son limitados; se requiere ampliar cobertura en periferias.

Se necesitan datos sistemáticos sobre empleos verdes para población migrante.

La gobernanza transversal es efectiva, pero exige coordinación continua y recursos.

La transición justa requiere acompañamiento psicosocial y formación técnica sostenida.

8. MEDIOS DE VIDA Y EMPLEOS VERDES[2]

São Paulo apunta a institucionalizar rutas de empleos verdes específicamente accesibles para población migrante, integrando formación técnica, trabajo remunerado, regularización migratoria y acompañamiento psicosocial.

La ciudad busca articular los empleos verdes a través de POT, CATE y CRAI Oriana Jara.

Este ecosistema permitirá que migrantes accedan a empleos verdes en sectores donde existe alta demanda laboral y escasez de mano de obra calificada.

Los ejes del POT vinculados a empleos verdes incluyen:

- POT Parques: mantenimiento de áreas verdes, jardinería, agroecología, compostaje.
- POT Defesa Civil: gestión de riesgos, drenaje urbano, prevención de desastres.
- POT Agricultura: agricultura urbana, huertas comunitarias, producción agroecológica.
- POT Zeladoria: reciclaje, economía circular, limpieza urbana sostenible.
- POT Agentes de Desenvolvimento Sustentável: educación ambiental, transición ecológica.

El POT otorga una bolsa mensual a los participantes, este financiamiento facilita las personas migrantes estudien y trabajen simultáneamente. Las personas migrantes participan activamente se reportan 449 beneficiarios activos en 2025–2026.

CATE ofrece ferias de empleo específicas para migrantes, certificación profesional, cursos técnicos en áreas verdes, intermediación laboral con empresas que buscan perfiles sostenibles. En 2025–2026, 615 migrantes participaron en ferias de empleo, con 599 derivados a oportunidades laborales.

CRAI Oriana Jara cumple un rol clave de regularizar documentación, orientar sobre derechos laborales, derivar a POT y CATE, ofrecer apoyo psicosocial e identificar casos de explotación laboral (vía COMTRAE).

GOBERNANZA MIGRATORIA, RETORNOS Y EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS EN SAN MARCOS, GUATEMALA

El caso de San Marcos en Guatemala es un ejemplo claro de cómo las políticas existentes en cada municipio deben responder a las dinámicas propias de su territorio, así como se alinean a la realidad del país. Este municipio fronterizo, cabecera del departamento homónimo, presenta un escenario de "ciclo migratorio completo", es un territorio de origen de personas migrantes, un espacio de tránsito, un municipio de destino y uno donde las personas son retornadas. Históricamente, mucha de su población migra a Estados Unidos, razón por la cual las remesas representan el 10.2% del PIB local del municipio de San Marcos, según información municipal proporcionada por la Dirección Municipal de Asuntos Migratorios de San Marcos (DINAMIG) .

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, San Marcos es uno de los departamentos con mayor número de retornados al país, con 3,163 personas solo entre enero y abril del 2026. A nivel municipal, la Municipalidad de San Marcos reporta entre 2020 y 2024, 2831 personas retornadas. (Fuentes, 2024)

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Caso:
Gobernanza migratoria local, reintegración socioeconómica y empleos verdes incipientes vinculados a emprendimientos agrícolas.

Ciudad:
San Marcos, Guatemala

Periodo:
2020 – presente. .

Instituciones claves:
Dirección Municipal de Asuntos Migratorios (DIMAMIG), Mesa Técnica Municipal de Migración, Comisión de Asuntos Migratorios del COMUDE, Dirección Municipal de la Mujer, Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud, Cooperación internacional

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Municipio fronterizo, con exposición relativamente limitada a eventos climáticos extremos, pero alta dependencia agrícola, con potencial para empleos verdes en agricultura sostenible, gestión de recursos y emprendimientos verdes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

El municipio ha construido un ecosistema municipal de gobernanza migratoria. Desde 2021 crea una Ventanilla Informativa de Migración y una Comisión de Asuntos Migratorios en el COMUDE.

En el 2022 formulan la primera Política Municipal de Migración, que luego se actualiza en el 2025 Política Municipal de Migración y se conforma una Mesa Técnica Municipal con 37 instituciones.

En 2023 se aprueba el Protocolo Interinstitucional de Atención a Migrantes de Origen, Tránsito y Retorno, que define rutas de atención, reintegración y referencia institucional. Estas rutas de reintegración contemplan el fortalecimiento productivo y la seguridad alimentaria, por medio de la vinculación interinstitucional de la DIMAMIG con la Dirección de Desarrollo Económico Local y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Estas instancias brindan apoyo técnico a las personas retornadas para mejorar la productividad de los cultivos locales (café, maíz, hortalizas). Brindan apoyo a pequeños productores con acceso a capital semilla, insumos agrícolas, y herramientas para que puedan establecer o reactivar sus propias parcelas y se promueve la creación de cooperativas locales para mejorar la comercialización de productos agrícolas.

En 2024, se crea el DIMAMIG como unidad técnica especializada. Entre sus funciones, abordan temas de reintegración laboral, mediante procesos de orientación laboral, vinculación con el sector privado y apoyo con capital semilla. La municipalidad brinda asesoría técnica agrícola y financiera.

Aunque existen actividades agrícolas sostenibles, el municipio no clasifica formalmente estos empleos como "empleos verdes" por falta de conocimiento técnico sobre la categoría.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Atención integral a migrantes de origen, tránsito, destino y retorno mediante DIMAMIG. Durante lo que va del 2026, han atendido a alrededor de 300 personas retornadas, por medio de reintegración laboral con empresas y emprendimientos agrícolas y aproximadamente a 30 personas en tránsito.

Se ha institucionalizado la gobernanza migratoria local.

Capital semilla entregado a personas retornadas y acompañamiento técnico municipal.

Promoción de prácticas de cultivo sostenible, por medio de capacitación, entrega de capital semilla, acompañamiento técnico en el sector agrícola de alrededor de 300 personas retornadas.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

Los procesos de gobernanza migratoria en San Marcos son de carácter participativo y comunitario. Por medio de la Comisión de Asuntos Migratorios del COMUDE, integran a representantes comunitarios y actores institucionales. A su vez, los Consejeros Comunitarios de Migración actúan como enlaces territoriales para identificar casos y participar en la toma de decisiones. Esto fortalece la legitimidad del municipio.

La Mesa Técnica Municipal reúne a 37 instituciones gubernamentales, internacionales y comunitarias, con roles definidos en el Protocolo Interinstitucional, entre las instituciones está la DIMAMIG, la Dirección de Desarrollo Económico Local que diseña los planes de inserción laboral y apoyo a emprendimientos, la Oficina Municipal de la Mujer, los COCODES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación y la Cooperación Internacional.

6. ELEMENTOS REPLICABLES

La creación de DIMAMIG como unidad técnica municipal especializada en migración, replicable en municipios con flujos migratorios complejos.

La definición del Protocolo Interinstitucional como herramienta para ordenar servicios de atención, definir pasos a seguir y articular las instituciones.

La creación de la Mesa Técnica Municipal, como mecanismo de gobernanza participativa y multisectorial.

La entrega de capital semilla para emprendimientos agrícolas, como ruta para la empleabilidad de personas migrantes retornadas.

7. LECCIONES APRENDIDAS

La institucionalización de la gobernanza migratoria a nivel municipal facilita la continuidad de los procesos, incluso si hay rotaciones en los gobiernos.

La reintegración laboral requiere de un tejido económico local comprometido y que facilite el proceso.

La participación de actores locales y miembros de la comunidad aumenta la legitimidad y eficacia en la atención a personas migrantes.

Es clave el fortalecimiento de los sistemas de información, para que los municipios cuenten con datos y pueda mejorar sus procesos de planificación.

El municipio requiere asistencia técnica para clasificar empleos verdes, diseñar rutas de transición justa y preparar proyectos financiables para fondos climáticos.

8. MEDIOS DE VIDA Y EMPLEOS VERDES[2]

El Municipio de San Marcos, desarrolla acciones en empleabilidad verde incipientes, vinculados a agricultura sostenible, emprendimientos agro-productivos y asesoría técnica para la mejora de prácticas agrícolas, lo cual representa un enorme potencial de escalamiento, de cara a un proceso de transición justa y empleabilidad verde. Estos empleos, aunque no se clasifican como "verdes" cumplen criterios de sostenibilidad (acorde a la OIT y PNUMA son acciones con impacto ambiental positivo, como la eficiencia energética, descarbonización, correcta gestión de residuos y acciones de adaptación y cumplimiento de trabajo decente, como ingresos dignos y justos, cumplimiento de derechos laborales) y pueden por tanto integrarse a acciones de transición justa.

La municipalidad acompaña emprendimientos con capital semilla, asesoría técnica agrícola y educación financiera, lo cual genera potencial para la ampliación de empleos verdes en agricultura sostenible y agroecología; gestión de residuos y reciclaje; energía solar comunitaria; construcción resiliente.

ABORDAJE DE LAS BRECHAS EN EL ACCESO AL EMPLEO EN **BOGOTÁ, COLOMBIA**

Bogotá es uno de los casos a nivel regional que ha logrado avanzar en los procesos de integración de población migrante en las estrategias de empleabilidad y en la transición hacia empleos verdes. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, la ciudad opera un sistema de intermediación laboral, formación y un programa de incentivos para el sector privado, aunado a procesos de análisis de información, que tiene por objetivo disminuir las brechas de acceso a empleo de 19 poblaciones priorizadas (mujeres, jóvenes, población migrante, personas con discapacidades, población LGTBIQ+, entre otras). Aunque la ciudad enfrenta desafíos para identificar, clasificar y medir los empleos verdes, han iniciado con la construcción de una estrategia de "enverdecimiento" del servicio público de empleo que se articula con la política climática.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Municipio:
Bogotá, Colombia

Periodo:
2020–actualidad..

Tipo de movilidad:
Migración internacional; migración interna.

Institución líder:
Secretaría de Desarrollo Económico – Subdirección de Empleo y Formación - Secretaría de Ambiente

2. CONTEXTO TERRITORIAL, CLIMÁTICO Y SOCIOECONÓMICO

Bogotá es una ciudad cuya principal actividad económica está vinculada al sector de servicios, seguida por el comercio y la logística. La ciudad presenta importantes desigualdades en cuanto al acceso al empleo, especialmente para las mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. Adicionalmente, recibe flujos migratorios especialmente desde Venezuela. La población migrante extranjera, enfrenta barreras para su inclusión laboral debido a que no cuentan con documentación que los habilite para trabajar (permisos) y no tienen sus títulos o documentos que certifiquen sus conocimientos, además enfrentan discriminación.

En materia climática, Bogotá está en proceso de implementación de su política de acción climática, la que prioriza el fortalecimiento de empleos verdes vinculados a la construcción sostenible, energía, gestión de residuos, servicios ambientales, recuperación de ecosistemas y transporte público.

No obstante, acorde a la Secretaría este proceso de transición requiere de nuevas habilidades técnicas y certificaciones que aún no están plenamente desarrolladas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O INICIATIVA

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se implementa una Ruta de Empleabilidad, la cual incluye varios componentes:

- » Registro de las personas interesadas en plataformas de intermediación laboral.
- » Procesos de orientación socio-ocupacional.
- » Formación laboral en habilidades técnicas.
- » Derivación a procesos de regularización migratoria (en alianza con Migración Colombia).
- » Desarrollo de eventos especializados para población migrante.
- » Entrega de incentivos monetarios a empresas que contraten poblaciones de las 19 priorizadas (Programa Empleo Incluyente).
- » Entrega de incentivos no monetarios como reconocimiento acciones de inclusión laboral (Sello Incluyente, Galardón Trabajo Decente).

En cuanto a la empleabilidad verde, ha desarrollado una Metodología de Empleos Verdes en Bogotá (ODE), la cual esta alineada con, la estrategia de enverdecimiento del servicio público de empleo, y que comprende la identificación preliminar de sectores verdes priorizados, la generación de alianzas con la Secretaría de Ambiente y Servicio Público de Empleo y el desarrollo de pilotos sectoriales para identificar vacantes verdes.

4. IMPACTO O RESULTADOS

Inclusión de población migrante venezolana en el programa "Ruta de Empleabilidad".

Reducción de barreras para el acceso a documentos mediante articulación institucional.

Oferta de formación en turismo sostenible, desarrollo sostenible y habilidades verdes.

Avances en la metodología oficial para identificar empleos verdes.

Alianzas con sector privado (IBM, AWS) para ampliar formación técnica.

Análisis de demanda laboral que identifica brechas de habilidades y discriminación estructural.

5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ENFOQUE DE DERECHOS

La estrategia incorpora procesos diferenciados para el trabajo con las 19 poblaciones priorizadas, en el caso de las poblaciones migrantes cuentan con procesos de derivación de la población en condición irregular para apoyo en procesos de regularización migratoria. A su vez desarrollan eventos especializados para poblaciones migrantes y acciones para reducir discriminación de género, edad y condición migratoria.

Han implementado alianzas con organizaciones sociales y entidades públicas para ampliar la "Ruta de la Empleabilidad".

6. ELEMENTOS REPLICABLES

Programa de incentivos monetarios y no monetarios para empresas que contratan población migrante.

El desarrollo de una ruta de empleabilidad con enfoque diferencial.

La articulación con entidades de regularización migratoria.

La generación de alianzas con sector privado para formación técnica.

La creación de una estrategia de enverdecimiento del servicio público de empleo

7. LECCIONES APRENDIDAS

El municipio requiere metodologías claras, que faciliten la identificación empleos verdes ya existentes. Se recalca que las empresas enfrentan dificultades para clasificar vacantes verdes, porque cuentan con poco conocimiento técnico.

Del lado de la demanda, las barreras de habilidades técnicas son la principal limitación para acceder a empleos verdes.

La integración laboral de migrantes requiere articulación con los organismos nacionales con competencias en materia de regularización.

Los municipios requieren de indicadores de demanda verde, de este modo pueden llevar procesos más claros de formación

8. MEDIOS DE VIDA Y EMPLEOS VERDES
Bogotá identifica sectores verdes priorizados por su política climática, como la construcción sostenible, energía y eficiencia energética, gestión de residuos, recuperación de ecosistemas, gestión del riesgo y transporte público sostenible.
En función de esto ofrecen formación en turismo sostenible, desarrollo sostenible y habilidades verdes. Y están trabajando en desarrollar un mapeo de habilidades y competencias verdes aunado a pilotos sectoriales para identificar vacantes verdes.
El programa de incentivos para empresas con potencial para generar empleo en sectores verdes aún no ha sido implementado debido a la falta de información necesaria para identificar y reconocer estos puestos de trabajo de manera sistemática. Actualmente, los sistemas de información laboral no cuentan con una clasificación específica de vacantes verdes y tampoco existen certificaciones estandarizadas que permitan determinar con claridad qué empleos pueden considerarse verdes.

CONCLUSIONES

El análisis comparado de los casos municipales incluidos en este estudio confirma que existen esfuerzos cada vez más importantes y técnicamente relevantes, liderados desde los gobiernos locales de la región, para el abordaje de la movilidad humana en sus acciones de gestión del riesgo, adaptación al cambio climático, reubicación planificada y transición justa.

Todos los esfuerzos son diferentes y responden a contextos sociales, culturales, territoriales y económicos propios de cada país y municipio: los municipios rurales del Corredor Seco, ciudades fronterizas, metrópolis densamente urbanizadas y territorios costeros enfrentan riesgos climáticos, presiones migratorias y capacidades institucionales profundamente distintas, lo que hace imposible una única ruta de acción.

En una región tan heterogénea no existe una receta única para todos los países. Se requiere de combinaciones de políticas climáticas, de conservación y políticas sociales, acordes a las condiciones locales donde se debe ponderar los costos y beneficios de las diferentes alternativas, y se evalúe sus beneficios distributivos. (Brassiolo, 2023)

La presente investigación pretende poner en evidencia la diversidad de abordajes, destacando iniciativas que van desde:

- protocolos de evacuación inclusivos,
- mesas interinstitucionales,
- ventanillas únicas migratorias,
- comités comunitarios,
- sistemas de alerta temprana,
- procesos de "enverdecimiento" de los programas de inclusión laboral,
- hasta materiales de comunicación inclusivos.

El presente mapeo ofrece potenciales cursos de acción a distintos actores locales, destacando, como elemento de convergencia, el creciente interés municipal de actuar, incluso en contextos donde no se cuenta con las condiciones óptimas para hacerlo.

El análisis evidencia una serie de desafíos a nivel municipal de orden técnico, caracterizado por equipos reducidos, conocimientos limitados sobre temáticas de inclusión de población migrante y bajas capacidades tecnológicas. A esto se suma que, en municipios pequeños o periféricos, los presupuestos son acotados y los fondos para el desarrollo de algunas iniciativas dependen de la voluntad política o bien de apoyos puntuales de actores de la cooperación internacional. Asimismo, la falta de datos sistematizados dificulta la planificación a largo plazo y la toma de decisiones más estratégicas.

Se requiere de la transformación digital de los gobiernos locales o municipios, la cual es una prioridad, debido a que les va a facilitar llevar un registro de eventos, impactos y acciones de respuesta desarrolladas. Sin embargo, es importante recordar que la digitalización y acceso a la tecnología, no consisten únicamente en la mejora de los procesos, sino que se requiere transformaciones más complejas como cambios en la gobernanza de la información y la cultura organizacional. Por lo que es clave un trabajo integral en termino de capacidades (Alves, 2025).

Además, es importante recordar, que los municipios se encuentran insertos en una arquitectura político-administrativa determinada, por lo que se hace fundamental en muchos casos la vinculación de las acciones a marcos normativos más amplios. En este sentido, un dato aparentemente evidente pero que se constata con firmeza radica en que los casos más exitosos están relacionados de forma directa con leyes a nivel nacional que respaldan o aportan recursos al accionar local, por lo que una institucionalidad macro consolidada resulta definitoria para la buena gobernanza local

A pesar de estas limitaciones, los casos analizados exponen prácticas valiosas y replicables, que articulan movilidad humana, gestión del riesgo y transición justa, cuyo fortalecimiento y escalamiento de dependerá del apoyo técnico, acceso a financiamiento adecuado y sostenible y la creación de marcos de gobernanza multinivel. La evidencia muestra que, al contar con instrumentos claros para la coordinación interinstitucional y mecanismos definidos de participación comunitaria, las acciones se vuelven más sostenibles, facilitando la creación de alianzas, lo que, a su vez, lleva a modelos de gestión inclusivos.

En síntesis, la región cuenta con experiencias municipales que integran movilidad humana y cambio climático de manera innovadora. El desafío será fortalecer las capacidades locales, especialmente en temas de planificación y ordenamiento territorial, integración, transición justa y empleos verdes, cerrando brechas estructurales y consolidando mecanismos de cooperación multinivel que permitan a los municipios transformar estas acciones en políticas públicas sostenibles y consolidadas en los territorios.

ANEXO

LISTADO DE MUNICIPIOS ENTREVISTADOS

	ACTOR ENTREVISTADO	MUNICIPIO	PAÍS
1	Coordinador de Hábitat y Planeamiento Urbano - ACUMAR	Ciudad Autónoma de Buenos Aires + 14 municipios del conurbano bonaerense	Argentina
2	Ex Coordinadora Nacional del Proyecto Binacional con Argentina	Paysandú	Uruguay
3	Departamento de Asuntos Internacionales del Municipio Secretaría de Trabajo y Desarrollo Coordinadora de Políticas Públicas para migrantes del Departamento de Derechos Humanos y Ciudadanía	Sao Paulo	Brasil
4	Gestión del Riesgo Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	Medellín	Colombia
5	Gestor de Sistemas de Información Geográfica y Miembro de la Comisión Municipal de Emergencias	Upala	Costa Rica
6	Coordinadora en gestión y atención migratoria de la Dirección Municipal de Asuntos Migratorios de la Municipalidad	San Marcos	Guatemala
7	Director de desarrollo sostenible y resiliencia en la Secretaría de Protección Civil. Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo del ayuntamiento municipal	Tapachula	México
8	Dirección municipal de gestión integral de riesgos	Camotán	Guatemala
9	Encargada de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Heredia	Heredia	Costa Rica
10	Secretaría de Protección Civil	Cacahoatán	México
11	Dirección de empleo y Formación de la secretaría de Desarrollo Económico	Bogotá	Colombia

BIBLIOGRAFÍA

ACUMAR. (2017). Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la cuenca matanza riachuelo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ACUMAR. (Enero de 2026). acumar.org.ar. Obtenido de https://monitorpisa.acumar.gob.ar/obras-y-acciones/

Alcaldía de Medellín. (2021). Anexo 5 Proceso de Reasentamiento. Medellín.

Alves, G. B. (2025). Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe. CAF — banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Arguello, A. (Mayo de 2026). Coordinador de Hábitat y Planeamiento Urbano en ACUMAR. (A. Vásquez, Entrevistador)

Ayuda en Acción. (2025). Inmovilidad en Contextos Frágiles: Entre la Dignidad, el Arraigo y la Migración. Ayuda en Acción. Obtenido de https://ayudaenaccion.org/uploads/2025/06/Informe-de-arraigo-reducido-ESP.pdf

Banco Mundial. (2020). Resilient Cities Program: Urban Resilience in Latin America.

Brassiolo, P. E. (2023). Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad. Distrito Capital: CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Obtenido de https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2089

C40. (2024). Future Urban Landscapes. Obtenido de https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Future-urban-landscapes-Climate-migration-projections-in-cities?language=en_US

C40 Cities & Institute for Sustainable Futures. (2024). Empleos verdes decentes y migración laboral oportunidades para liderazgos urbanos. C40 Cities.

Caliari, A. (2021). ATLAS DE VULNERABILIDADES. Jubilee USA, Latindad. Obtenido de https://vulnerabilityatlas.org/downloads/es/Atlas%20de%20Vulnerabilidad%20-%20Brief.pdf?lang=es

CEPAL. (2010). Terremoto en Chile: Una evaluación inicial.

CEPAL. (2020). Desastres y desigualdad en América Latina.

CIDH. (2024). Resolución sobre Movilidad Humana inducida por el Cambio Climático, Resolución 2/24. OEA. Obtenido de https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2024/resolucion_cambio_climatico.pdf

CNE. (2019). Gestión del riesgo y planificación territorial.

Cooperación Española, Paz y Desarrollo, ASEDE. (2023). Política de Vivienda Inclusiva y Sostenible del Municipio de Camotán, Chiquimula.

Correa, E., Remíres, F., & Sanahuja, H. (2011). Populations at Risk of Disaster-Induced Displacement. Wold Bank.

CSM y OIM. (2022). Mapeo sobre migración, medio ambiente y cambio climático en América del Sur. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) & Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Delgado Asad, E., & Young, A. (2018). Environmental Impacts in São Paulo City, Brazil.

Departamento Administrativo de Planeación Municipio Medellín. (2018). medellin.gov.co. Obtenido de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/2019/PPPM/Socializaci%c3%b3n%20moradores-interac_web.pdf

Departamento Administrativo de Planeación Municipio Medellín. (2019). medellin.gov.co. Obtenido de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/2019/PPPM/PPT.%20PP%20Moradores%20JUL2018.pdf

Fuentes, M. F. (2024). Migración y retornados algunas preocupaciones desde el municipio de San Marcos. Instituto de investicación IDICUSAM. Obtenido de https://cusam.edu.gt/wp-content/uploads/2024/03/IDICUSAM-FFME18.pdf

García, N. (Mayo de 2026). Ex Coordinadora Nacional del proyecto Binacional con Argentina. (A. Vásquez, Entrevistador)

IDMC. (2024). Global Report on Internal Displacement (GRID 2024). Internal Displacement Monitoring Centre.

IDMC. (2024). Global Report on Internal Dosplacement. Obtenido de https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-Global-Report-on-Internal-Displacement.pdf?_gl=1*10t4bvm*_ga*NTI5OTIzMDMyLjE3NzUwMDExMTY.*_ga_PKVS5L6N8V*czE3ODA3MDEwNjIkbzYwJGcxJHQxNzgwNzAxMTY2JGo0OSRsMCRoMA

INDECI. (2018). Informe de Evaluación de Daños por El Niño Costero. Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú.

IPCC. (2022). Sixth Assessment Report (AR6).

La Ruta del Clima. (2023). Movilidad Humana. San José: La Ruta del Clima. Obtenido de https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2024/03/Movilidad-Humana_final.pdf

Martinez, A. (2021). Daños y Pérdidas: una introducción al Párrafo 51 y la compensación. San José: La Ruta del Clima. Obtenido de https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2024/03/Danos_y_Perdidas_lrc.pdf

Martinez, A., & Gutiérrez, H. (2020). Movilidad Humana: Derechos Humanos y Justicia Climática. San Salvador: Fundación Heinrich Böll – Oficina San Salvador. Obtenido de https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/37577

Mixed Migration Centre. (2022). Climate Change, environmental stressors, and mixed migration. Obtenido de www.mixedmigration.org

MMC. (2022). CLIMATE MIGRATION IN MEXICAN AND CENTRAL AMERICAN CITIES. MMC. Obtenido de https://mmc-production.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/28192612/MMC-Climate-Migration-brief-High-Res-2.pdf

OIM. (2019). Glosario de la OIM sobre migración. Ginebra.

OIM. (2019). Planned Relocation in the Context of Disasters and Climate Change. International Organization for Migration.

OIT. (2015). Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf

OIT. (s.f.). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de ilo.org: https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/just-transition-towards-environmentally-sustainable-economies-and-societies/que-es-un-empleo-verde

ONU-Hábitat. (2020). Urban Relocation and Risk Reduction in Latin America. United Nations Human Settlements Programme.

PNUD. (2020). Coastal Adaptation Project: Building Climate Resilience in Portmore.

Romero, A. (Junio de 2026). Comisión Municipal de Emergencias. (A. Vasquez, Entrevistador)

UNDRR. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

UNFCCC. (2024). Guía técnica sobre la integración de los vínculos entre la movilidad humana y el cambio climático en los procesos nacionales pertinentes de planificación sobre el cambio climático. Obtenido de https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TG_Human%20Mobility_24092025_Spanish.pdf

UNGRD. (2012). Reconstrucción de Gramalote. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Vasquez, J., & Luna, W. (Mayo de 2026). DAP. (A. Vasquez, Entrevistador)

Weller, J. (2025). Empleos verdes y sistemas de protección social. CEPAL. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/d5a1dd5c-2aa6-4c8c-a17b-87cec0371247/content


OIM
ONU MIGRACIÓN